**ACTA Nº 6-20**

**JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. -** San José, a las ocho horas del dos de marzo de dos mil veinte.

Sesión ordinaria con asistencia de los másteres Carlos Montero Zúñiga, Miguel Ovares Chavarría y Mauricio Villalta Fallas, de las licenciadas Ingrid Moya Aguilar y Ana Lucrecia Ruiz Rojas y del licenciado Arnoldo Hernández Solano.

**ARTÍCULO I**

**Documento N° 159-2020**

Se aprueba el acta de la Junta Administradora N° 5-2020 de la sesión celebrada el 24 de febrero de 2020.

El Integrante Carlos Montero Zúñiga y el Integrante Mauricio Villalta Fallas, se abstienen de aprobar el acta, debido a que no participaron en la sesión.

**ARTÍCULO II**

**Documento N° 146-2020**

**Antecedente**

En sesión N° 2-2020 celebrada el 3 de febrero de 2020, artículo X, esta Junta Administradora tomó el siguiente acuerdo:

“(…)

**Se acordó: 1.)** Esta Junta Administradora está anuente a cancelar los montos que se adeudan a la Superintendencia de Pensiones por concepto de cobro por supervisión, sin embargo, para contar con una mayor claridad, se solicitada al citado órgano nos indique el detalle de los porcentajes, la metodología y los procedimientos vigentes que deben aplicarse, antes de la citada modificación. **2.)** Asimismo, se solicita a la Superintendencia de Pensiones nos aclare si el cobro por la por supervisión se contabiliza desde el 22 de mayo de 2018, momento en que se publicó la Ley N° 9544 denominada “Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial” o desde el momento de la Junta Administradora del Fondo de conformó efectivamente, sea el 27 de enero de 2020.”

- 0 -

Con base en lo anterior, el señor José Ezequiel González, jefe del Área de Comunicación y Servicios de la Superintendencia de Pensiones, remitió el oficio N° SP-258-2020 del 25 de febrero de 2020, dando respuesta al acuerdo adoptado por esta Junta Administradora en sesión N° 2-2020 celebrada el 3 de febrero de 2020, artículo X, el cual se adjunta a continuación:



- 0 -

De conformidad con lo que establece el transitorio de la Ley N° 9544 que en lo conducente señala que **“***En tanto se integre la Junta**Administradora, el Consejo Superior del Poder Judicial continuará ejerciendo las atribuciones a que se refieren los incisos 12, 13, 14 y 15 del artículo 81 de la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas”,* **se acuerda lo siguiente: 1.)** Tener por presentado el oficio N° SP-258-2020 del 25 de febrero de 2020, suscrito por el señor José Ezequiel González, jefe del Área de Comunicación y Servicios de la Superintendencia de Pensiones. **2.)** Autorizar al Departamento Financiero Contable para que cancele los montos correspondientes por concepto de supervisión a la Superintendencia de Pensiones por el periodo de mayo 2018 (a partir de la entrada en vigencia de la Ley de reforma) a diciembre de 2019. **3.)** Una vez el Departamento Financiero Contable disponga de la suma adeudada, procederá a trasladar los recursos a la cuenta asignada para ese rubro, a esos efectos, comunicarán a la Superintendencia de Pensiones para el requerido débito. **4.)** Solicitar al Departamento Financiero Contable informe a esta Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial sobre el monto trasladado para el pago de supervisión de este Fondo por el periodo antes señalado. **5.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Superintendencia de Pensiones.

La Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO III**

**Documento N° 139-2020**

El doctor Álvaro Ramos Chaves, Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° SP-241-2020 del 24 de febrero de 2020, remitió lo siguiente:

“Mediante oficio N°5523-DE-2019 del 25 de noviembre de 2019, se recibió la respuesta al oficio SP-1056-2019 del 29 de octubre de 2019, en atención a los requerimientos efectuados como resultado de la revisión del estudio actuarial con corte al 31 de diciembre de 2018.

Sobre el particular, se hacen las siguientes observaciones a los requerimientos del 1 al 8, a modo que sean tomadas en cuenta para el próximo estudio actuarial:

**Requerimiento 1:** Se recibió la información que la entidad suministró a la firma para la elaboración de la valuación actuarial; no obstante, es importante que el actuario explique los procesos de revisión y depuración de los datos para cotejar la información que se presenta en el informe de la valuación.

**Requerimientos 2 y 3:** Se atiende con la documentación recibida el cumplimiento de los artículos 15, 16 y 18 del Reglamento Actuarial y el dato de inflación utilizado en la valuación.

**Requerimientos 4, 5 y 6:** Se recibió el supuesto para el retiro por vejez en el caso de la Ley 7333 correspondiente al requerimiento 5. Los requerimientos 4 y 6 fueron parcialmente atendidos en cuanto a la evidencia de que las tablas de invalidez y de retiro por vejez utilizadas en la valuación eran las apropiadas, así como la información de la distribución por sexo - edad y el supuesto de los salarios iniciales de las nuevas generaciones, respectivamente. Al respecto, la revelación y el análisis de qué tan apropiado es cada uno de los supuestos, debe hacerse en la valuación, debiendo remitir los parámetros que alimentan el modelo, por ejemplo, las probabilidades de transición de la cadena de Márkov mencionada en la respuesta de la firma contratada.

**Requerimientos 7 y 8:** Se recibieron las proyecciones y los balances actuariales corregidos, pero se mantienen algunas de las inconsistencias, por ejemplo, la relación entre las cotizaciones y la masa salarial, que sí se considera un dato importante para realizar un análisis integral de los resultados de la valuación.

Con respecto a estos requerimientos, se les recuerda que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es el responsable de verificar que la información utilizada y presentada en la valuación actuarial (datos, supuestos y resultados) cumpla con los principios de consistencia, razonabilidad y transparencia. Por lo anterior, su representada debe garantizar que las observaciones del oficio SP-1056-2019, en especial lo relacionado con la revelación y justificación de supuestos, sean analizadas y revisadas antes de remitir la próxima valuación actuarial a esta superintendencia.

Por otro lado, quedamos a la espera de la política de solvencia, del plan de acción para atender las recomendaciones de la valuación actuarial y del plan de recuperación, requerimientos 9, 10 y 11 del mencionado oficio; esto a más tardar el 3 de marzo de 2020.

Con respecto a la observación m) y al requerimiento 9, que concierne a la Política de Solvencia, llama la atención que la firma (Proveedor Integral de Precios Centroamérica S.A., PiPCA) en su oficio Ref.119/G/2019 del 21 de noviembre de 2019, dirigido a la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, recomienda que, se tome como referencia los indicadores de Razón de Solvencia (RS) y Razón de Solvencia Devengada (RSD) para el establecimiento del Plan de Recuperación para el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), en lugar de indicar que se refiere al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Incluso, esa propuesta de objetivo de solvencia y mínimo tolerable recomendado por la firma no se ajusta a la situación financiera y actuarial de su representada y tampoco, estaría alineado con el “*perfil de beneficios, los niveles de contribución definidos en la normativa y la estrategia de inversiones*”, como lo indica el artículo 4 del Reglamento Actuarial, siendo inadmisible el cumplimiento y seguimiento de los indicadores de solvencia recomendados.

Por lo anterior, para evitar situaciones que puedan exponer al Fondo, previo a remitir la información y/o documentos para atender requerimientos, se debe revisar la aplicabilidad y coherencia de las respuestas que le brindan las áreas internas del Poder Judicial y los entes externos contratados por esa Junta Administradora.”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el oficio N° SP-241-2020 del 24 de febrero de 2020, suscrito por el doctor Álvaro Ramos Chaves, Superintendente de Pensiones. **2.)** Referente a la solicitud de la documentación referente a la política de solvencia, el plan de acción para atender las recomendaciones de la valuación actuarial y el plan de recuperación, requerimientos 9, 10 y 11 del oficio N° SP-1056-2019, se solicita a la Superintendencia de Pensiones una ampliación de 10 días hábiles en el plazo de entrega de la información solicitada. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección Ejecutiva y del Departamento Financiero Contable, para los fines correspondientes. **Se declara acuerdo firme**.

**ARTÍCULO IV**

**Documento N° 148-2020**

El máster Robert García González, Auditor Judicial, remitió el oficio N° 236-04-SAFJP-«Staff\_type»2020 del 24 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“(…)

En consideración de la constitución formal de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero del 2020 y el criterio vertido por la Contraloría General de la República (oficio DFOE-PG-0436), sobre las competencias de la Auditoría Interna en relación con la citada Junta, se remite el presente informe de cierre, con el propósito de comunicarlo al Consejo Superior.

(…)

# Criterio de la Contraloría General de la República sobre las competencias de la Auditoría Interna respecto de la nueva Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial

Mediante oficio DFOE-PG-0436, del 10 de agosto de 2018 (anexo 1), la Contraloría General de la República emitió criterio sobre la facultad de fiscalizar, advertir o asesorar a este nuevo órgano. A continuación, se transcriben las conclusiones correspondientes:

*IV. CONCLUSIONES:*

*1) La Auditoría lnterna del Poder Judicial no tiene la facultad de fiscalizar, advertir o asesorar a la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por cuanto escapa de su ámbito de actuación institucional de conformidad con los artículos 7 y 21 de la LGCI; además por el hecho de haberse depositado la administración del Fondo en un órgano desconcentrado como la Junta, fuera del ámbito de jerarquía del Poder Judicial.*

*2) En relación a las labores de supervisión y regulación del Fondo y de la Junta Administrativa, el artículo 241 de la Ley 9544 reserva tales facultades a la Superintendencia de Pensiones (Supén) y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), respectivamente, por lo cual no se contempló la participación de la Auditoría del Poder Judicial.*

*3) La Ley General de Control Interno, Nro, 8292, establece que el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública está compuesto por una serie de órganos, entre los que se contemplan la administración activa y la auditoría interna de las instituciones. Al tener el jerarca limitadas sus competencias respecto de la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial como órgano desconcentrado, hace que falte uno de los componentes orgánicos del sistema de control interno (SCI), viéndose impracticable el deber, junto a los titulares subordinados, de cumplir con el artículo 10 de la LGCI, esto es, establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el SCI institucional respecto de la Junta.*

*3) Cualquier conflicto derivado de una fiscalización, advertencia o asesoría ejercida por la Auditoría del Poder Judicial en los temas propios del ámbito de competencia de la Junta, no podría ser solventado por el máximo jerarca, quedando el proceso de fiscalización y cumplimiento del sistema de control interno truncado, por cuanto cualquier revisión ulterior de disposiciones giradas por la Auditoría Judicial a la Junta, no podrían ser decididas por el jerarca, al tener limitadas sus competencias de frente a un órgano desconcentrado.*

Según lo establecido en los artículos 4 y 12, en relación con el 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los criterios que emita dicha entidad son vinculantes para quien consulta, en este caso la Auditoría Interna del Poder Judicial.

De esta forma, conforme al criterio del órgano contralor y por constituirse formalmente la Junta Administradora, se dan por concluidas nuestras competencias respecto al Fondo de Jubilaciones y Pensiones (FJP).

Lo anterior, sin demérito de brindar el apoyo requerido por ese órgano en cuanto al suministro de información, en procura de fortalecer el control interno del FJP.

# RENDICIÓN DE CUENTAS

## Antecedentes y conformación de la Sección de Auditoría del Fondo Jubilaciones y Pensiones.

En virtud de la importancia que reviste el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la Auditoría Judicial realizó sendos esfuerzos para fortalecerlo, por lo cual en junio del 2010 creó a lo interno de la Sección de Auditoría Financiera una Unidad para especializarla en la materia y dar una atención más oportuna a los requerimientos y aspectos más críticos.

A partir de junio del 2011, dicha oficina pasó a coordinar directamente con la Dirección de Auditoría, cuya estructura fue reconocida y modificada formalmente por el Consejo Superior en julio del 2015[[1]](#footnote-1) pasando a constituirse en una Sección de Auditoría, conformada por tres (inicialmente dos) profesionales en auditoría y una jefatura.

## Labores desarrolladas por la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

### Evaluaciones realizadas y su origen

A través del tiempo se desarrollaron diversas evaluaciones, sea mediante una modalidad periódica (anual) o menos recurrentes (para temas muy específicos), estableciendo un grado de prioridad para su realización.

Según los registros del sistema Team Mate de la Auditoría, desde el 2011 a la fecha, se han efectuado 54 estudios, de diversa temática, la cual se puede apreciar en el anexo 2.

Dada naturaleza del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, se presentó un porcentaje importante de asuntos no programados, en consideración de las solicitudes de la Administración o a iniciativa de la propia Auditoría, producto de las comunicaciones que se recibían, efectuando así una labor continua de evaluación, con oportunidad. A continuación, se ilustra porcentualmente lo indicado:

**Gráfico No.1**

Origen de los estudios realizados durante

el período comprendido entre 2011 y enero 2020

Nota: Se refiere al total de estudios realizados.

Fuente: Auditoría Judicial, reporte del sistema Team Mate sobre estudios realizados por la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, con corte al 29 de enero del 2020.

### Actividades sucintas de auditoría

Siendo consecuentes con la necesidad de lograr una mayor oportunidad, se realizaban investigaciones más expeditas, las cuales se denominaban actividades sucintas de auditoría, generando un valor agregado importante, según se aprecia de seguido:

* Se lograba determinar si era necesario realizar un estudio más profundo del tema en cuestión
* Se comunicaba mediante oficio al órgano superior sobre los resultados obtenidos para una solicitud específica
* Se efectuaban procedimientos de revisión periódica relacionados con el otorgamiento de un derecho (jubilaciones, reconocimientos), entre otros.

En el anexo 3 se extraen algunas de las actividades sucintas más relevantes.

### Otras actividades

A continuación, se presentan algunas otras actividades que contribuyeron a una mejor gestión de las labores atinentes al FJP:

* Comunicación trimestral de los informes emitidos sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones a la Superintendencia de Pensiones.
* Reuniones con la Superintendencia de Pensiones para tratar temas de evaluación, atención de requerimientos, cambios en la normativa, capacitaciones, entre otros.
* Visita a otros regímenes de pensiones del país para conocer formas de trabajo y buenas prácticas.
* Reuniones con integrantes del Consejo Superior o Corte Plena.
* Asistencia a sesiones de Consejo Superior y Corte Plena.
* Elaboración del Plan de Auditoría basado en riesgos.

## Informes emitidos y logros en la labor de Auditoría

Durante el tiempo de evaluación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, esta Auditoría ejecutó sus actividades de conformidad con los Planes Anuales de Trabajo presentados ante la Contraloría General de la República y la Corte Plena. Asimismo, se atendieron solicitudes no contempladas en la planificación anual, que constituyeron situaciones relevantes, las cuales permitieron de forma integral dirigir los esfuerzos de la Sección hacia las áreas estratégicas y operativas más notables del Fondo, debido al papel preponderante que ostentan y los riesgos asociados.

La mayor parte de los estudios ejecutados por la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones corresponde a fiscalización para un total de 66 (35%), los seguimientos de recomendaciones ocuparon el segundo puesto con 62 (33%) y los 42 informes de advertencia en el tercer lugar (22%). Otros tipos de labores también se ejecutaron como lo fueron asesorías, consultas, atención de denuncias, etc.

En el anexo 4 se detalla los estudios efectuados por esta Sección desde el año 2011 hasta enero 2020. Seguidamente se presenta un gráfico con dicha información:

**Gráfico No.2**

Informes emitidos por la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período comprendido entre 2011 y enero 2020 según su naturaleza

Fuente: Auditoría Judicial, reporte del sistema Team Mate sobre estudios realizados por la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

Durante el período citado los estudios llevados a cabo por la Sección contribuyeron a la obtención de logros a nivel financiero, administrativo, legal y operativo del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. En el anexo 5 se presenta un detalle de aquellos más representativos.

## Seguimiento y estado de las recomendaciones

La Ley General de Control Interno en su artículo 12, inciso c) establece la obligatoriedad de la Administración Activa de implementar las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría. Asimismo, el numeral 2.11 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el sector público, emitido por la Contraloría General de la República, requiere que nuestro despacho aplique un proceso de seguimiento de las recomendaciones derivadas de los servicios de auditoría, para asegurarse la implementación eficaz y dentro de los plazos definidos.

La implementación de las recomendaciones bajo seguimiento fortalece el sistema de control interno, el cual, según el artículo 10 de la Ley General de Control Interno, es responsabilidad del Jerarca y de cada titular subordinado en su ámbito de acción.

En la siguiente gráfica se resume el estado actual de las recomendaciones emitidas:

**Gráfico No.3**

Estado del total de recomendaciones emitidas

Periodo 2011 a enero 2020

Fuente: Auditoría Judicial, estudios realizados por la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

Respecto al significado del estado, es oportuno traer a colación lo siguiente:

* Una recomendación se clasifica como *aplicada* cuando se determina que la Administración Activa efectuó las acciones correspondientes para su debida implementación.
* Se considera *en proceso* cuando la Administración Activa ha llevado a cabo acciones para su implementación, pero no ha logrado culminar el proceso de implantación correspondiente.
* Se cataloga como *pendiente*, cuando la Administración Activa no ha adoptado las acciones para su total implementación.
* También las recomendaciones pueden recibir un estatus de *cerrada* por razones debidamente justificadas que imposibilitan su implementación. Por ejemplo, se determina que *perdió vigencia*, cuando se precisa un cambio en la situación detectada en el estudio de auditoría y la debilidad que dio origen a la recomendación ya no existe.

Es menester señalar que esta Auditoría reconoce a la administración el esfuerzo realizado para implementar las sugerencias emitidas, lo cual es digno de destacar, pues fortalece el sistema de control interno existente; no obstante, se hace la observación respecto a las acciones pendientes derivadas de las recomendaciones (en proceso, no aplicadas, no aplican por el momento) de no implementarse con la oportunidad requerida, exponen al Despacho a la eventual materialización de los riesgos asociados y por consiguiente, al impacto negativo sobre los objetivos, metas y procesos bajo su responsabilidad.

En el siguiente apartado se presenta un detalle de las recomendaciones que pueden ser de interés para la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, por su estado actual y algunas particularidades.

# CONSIDERACIONES FINALES

## Aspectos de interés para la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

En procura proteger los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones bajo la responsabilidad de la Junta Administradora, se motiva a continuar con la implementación de acciones de mejora para el perfeccionamiento constante del sistema de control interno.

De esta forma, se estimó conveniente traer a colación lo siguiente:

## Recomendaciones en proceso y cerradas

En el anexo 6 de este informe, se detalla cada una de las recomendaciones en proceso, cerradas (porque la Auditoría perdía la competencia sobre la evaluación del FJP) o pendientes, las cuales pueden ser sujeto de valoración por parte de la Junta Administradora ya que podría exponerse a la materialización de los riesgos asociados y, por consiguiente, al impacto sobre sus objetivos y metas.

## Estudios en proceso relacionados con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones

A la fecha del presente informe, la Auditoría Interna mantiene en proceso los siguientes estudios:

Pago de dietas a magistrados suplentes jubilados.

Mediante oficio N° 9951-18 del 24 setiembre 2018 se comunica a la Auditoría el acuerdo tomado por Corte Plena en la sesión N° 42-18 celebrada el 10 de setiembre de 2018, artículo III, donde se solicita un estudio e informe sobre las dietas pagadas a la magistrada López Madrigal y al magistrado Desanti Henderson, desde la fecha de jubilación, para determinar si se les han pagado sumas de más, contrario a lo establecido en ley y los lineamientos dispuestos por ese órgano.

Legalidad reconocimiento de tiempo servido

El objetivo de esta auditoría consistió en determinar si los reconocimientos de tiempo servido aprobados por el Consejo Superior se apegan al ordenamiento jurídico.

Comprendió la revisión de los reconocimientos aprobados por el Consejo Superior para anualidades, entre el 13 octubre del 2016 y 8 febrero 2019.

## Gestión del cambio de la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

En resguardo de una adecuada administración de los recursos, esta Auditoría se encuentra reorganizando las actividades que ejecutan los profesionales de la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, conforme lo establecido en el artículo 23 de la Ley General de Control Interno:

*Artículo 23.-Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento obligatorio.*

Consecuente con lo anterior, se está considerando lo establecido en los *“Lineamientos generales para el análisis de presuntos Hechos Irregulares”* recientemente emitidos por la Contraloría General de la República, dada la necesidad de abordar el riesgo de corrupción y fraude en el Poder Judicial, en procura de coadyuvar en los asuntos de interés institucional y de la Nación.

Posteriormente se estará realizando la gestión correspondiente para modificar el nombre de la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

## Agradecimiento.

Finalmente, externamos nuestro agradecimiento a cada uno de los Despachos por su disposición para brindar la colaboración e información requerida por la Auditoría Interna en las evaluaciones, ya que sin dicha cooperación nuestra labor se hubiese afectado enormemente, no siendo posible contribuir al alcance de los objetivos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

# ANEXOS

**Anexo 1**

**Criterio de la Contraloría General de la República**

**Competencias de la Auditoría Interna respeto la Junta Administradora**



**Anexo 2**

**Lista de temas abordados en las evaluaciones**

****

**Anexo 3**

**Ejemplos de actividades sucintas**

****

**Anexo 4**

**Informes emitidos**

****

**Anexo 5**

**Ejemplos de logros más relevantes**

****

**Anexo 6**

**Recomendaciones para atención de la Junta Administradora**

****

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tomar nota del oficio N° 236-04-SAFJP-«Staff\_type»2020 del 24 de febrero de 2020, suscrito por el máster Robert García González, Auditor Judicial. **2.)** trasladar el presente informe al Comité de Auditoría para su respectiva valoración.

**ARTÍCULO V**

**Documento N° 126-2020**

En sesión N° 2-2020 celebrada el 3 de febrero de 2020, artículo IV, se tuvo por recibido el oficio N° 274-DE-2020 del 22 de enero de 2020, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva referente al “Informe del análisis comparativo de títulos valores entre los registros del Poder Judicial y el ente custodio”, correspondiente al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, se tomó nota de los resultados del análisis comparativo de instrumentos al que se arribó en ese informe. Se tomó nota que, en los estados de cuenta, el monto de los cupones de los títulos valores de tasa variable, que se mantiene en el Banco de Costa Rica, se presentan desactualizados, mientras que en el sistema de inversiones del Macroproceso Financiero Contable, los montos de los cupones son calculados de acuerdo con las variaciones de la tasa básica pasiva. En ese momento, se solicitó a la Dirección Ejecutiva que continuara con el seguimiento de las solicitudes realizadas al ente custodio para depurar las diferencias presentadas en el informe. Finalmente, se solicitó al puesto de bolsa del Banco Costa Rica que comunicara a esta Junta Administradora cual es el plazo mínimo para poder actualizar y depurar las diferencias presentadas en el informe supracitado.

La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante oficio N° 740-DE-2020 del 20 de febrero de 2020, remitió lo siguiente:

“Para conocimiento del Consejo Superior, traslado oficio N° 167-TI-2020 de fecha 17 de febrero de 2020, suscrito por la MBA Floribel Campos Solano, Jefa del Departamento Financiero Contable, donde remite Informe sobre los resultados obtenidos en el arqueo de títulos valores, en la Central de Valores (CEVAL), en el mes de diciembre de 2019.”

- 0 -

Se transcribe literalmente el oficio N° 167-TI-2020 del 17 de febrero de 2020, a saber:

“En forma atenta, se indica que el Lic. Cristian Gómez Solís, Profesional I del Proceso de Inversiones y Pablo Valverde Vargas, Profesional I a.i., de la Unidad de Cuentas por Cobrar, del Subproceso de Ingresos de este Macroproceso, realizaron el arqueo de títulos valores físicos de las carteras de “Ingresos Sobre Cuentas Corrientes Judiciales,” y del “Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ)”, en la Central de Valores (CEVAL).

Sobre este particular, el citado arqueo se realizó el día 14 de febrero de 2020, a partir de la coordinación con personeros de la Custodia del Banco de Costa Rica (BCR), por lo que se evaluaron los movimientos al 31 de diciembre de 2019, en virtud de los procesos internos que tiene la Central de Valores (CEVAL).

De las revisiones y verificaciones de la información del inventario, de inversiones del sistema automatizado de inversiones del FJPPJ contra la que tenía la citada Custodia (CEVAL), se determinó lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monto** | **Cartera Física (1)** | **Cartera Total (2)** |
| Colones | 107.056.919.216,53 | 575.595.053.117,90 |
| Dólares | 24.325.192,03 | 89.888.308,89 |
| Udes | 69.063.028,23 | 111.313.030,98 |

Notas:

El Arqueo se realiza con base en los instrumentos físicos de la Cartera de Inversiones.

Incluye inversiones físicas, anotación en cuenta y macrotítulos.

Al respecto, también se cotejó la información de la cuenta de “Ingresos Sobre Cuentas Corrientes Judiciales” con el título físico y los cupones de interés pertinentes, cuyo valor facial es de 20.612.667,37 UDES, obteniendo resultados satisfactorios.

Por otra parte, de las Cuentas de “Contaduría Judicial”, “Fondo de Socorro Mutuo” y “Fondo de Emergencias” no se mantiene títulos físicos en la custodia de la CEVAL.

Ante lo expuesto, los resultados obtenidos en la evaluación efectuada fueron satisfactorios, pues se corroboró el respaldo documental físico de los títulos valores que poseen las referidas carteras de inversión.

(…)”



- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por rendido el oficio N° 167-TI-2020 de 17 de febrero de 2020, suscrito por la máster Floribel Campos Solano, Jefa del Departamento Financiero Contable y remitido por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante oficio N° 740-DE-2020 del 20 de febrero de 2020, correspondiente al “Informe sobre los resultados obtenidos en el arqueo de títulos valores, en la Central de Valores (CEVAL), en el mes de diciembre de 2019”. **2.)** Solicitar al “Custodia del Banco de Costa Rica” que remita lo solicitado por esta Junta Administradora en sesión N° 2-2020 celebrada el 3 de febrero de 2020, artículo IV, referente al plazo mínimo para poder actualizar y depurar las diferencias presentadas en el informe conocido en dicha sesión.

La Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable, tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO VI**

**Documento N° 130-2020.**

El MPM. Oslean Mora Valdez, jefe del Proceso de Inversiones del Departamento Financiero Contable, remitió correo electrónico del 20 de febrero de 2020, informando lo siguiente:

“Me permito informarles que ya está en proceso la asignación de Roles y expedientes a nivel de los sistemas SUPEN Directo y Ventanilla Electrónica de Servicios (VES), la Dirección Ejecutiva a través de don Melvin Obando, será la encargada de realizar las habilitaciones necesarias para el funcionamiento en “esta oportunidad” a nivel de dichos sistemas.

No obstante lo anterior, esta tarea aunque de carácter operativo, reza de principal importancia en las relaciones con la Superintendencia de Pensiones, al punto de que existe SP especifico que regula los tiempos para la remisión de información, tipos de usuario y hasta exige llevar una capacitación específica para los roles de asignación de usuario, entre otros factores a considerar. Me permito adjuntar el SP-194-2018 de la SUPEN, así como el oficio N°. 0073-FC-2018 en el cual se efectúan una sería de recomendaciones y observaciones a considerar para la ejecución de este requerimiento del regulador:





Dado lo anterior y ante la posición de la Dirección Ejecutiva de retirar su participación en las operativas relacionadas con el FJPPJ, considero de vital importancia que se valore la estructura necesaria para llevar a cabo esta tarea, en un futuro cercano, dados los posibles cambios de suplencia que podrían requerir la remisión de información señalada.

Adicionalmente y para efectos futuros, se adjunta un ejemplo de los oficios y poderes realizados ante la SUPEN para efectos de asignar a doña Ana Eugenia como representante legal del FJPPJ para efectos de aprobación de estos roles, en este caso a futuro sería necesario realizar esta gestión con la persona a quien la Junta Administradora designe.

Espero la información les sea de utilidad y me coloco a su disposición para cualquier consulta o comentario.”

- 0 -

En relación con lo anteriormente transcrito, en correo electrónico del 24 de febrero de 2020, el MPM. Oslean Mora Valdez, en su citada condición, adicionó lo que seguidamente se transcribe:

“Para efectos del trámite ante SUPEN Directo y ante la VES, considero oportuno designar la tarea en un profesional de inversiones (Steven) y uno de riesgo (Rodolfo), para poder realizar los trámites de registro y aprobación de los cambios normales.

Sin embargo para efectos de la inclusión de usuarios, se requiere un tercer perfil el de representante legal, el cual podría ser asignado a don Carlos Montero o en su defecto a quien decidan asignar en calidad de Director.

En estos momentos esta figura la asume doña Ana como Directora Ejecutiva y es quien da la última aprobación para cada uno de estos registros.

Espero la información les sea de utilidad.”

- 0 -

El integrante Montero Zúñiga, manifiesta que la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, está a disposición de continuar con todas las funciones y apoyando a la Junta Administradora con todos los procesos para su buen funcionamiento, de conformidad con el acuerdo tomado por este Órgano en sesión número 1-2020 artículo IV, por lo tanto esta junta le agradece la colaboración y autoriza para que continúe con todas las funciones que hasta el momento desempeña atinentes a los procesos de fondo.

**Se acordó:** **1.)** Tomar nota de lo comunicado por el MPM. Oslean Mora Valdez, jefe del Proceso de Inversiones del Departamento Financiero Contable, en correo electrónico del 20 de febrero de 2020, mediante el cual informa que ya está en proceso la asignación de Roles y expedientes a nivel de los sistemas SUPEN Directo y Ventanilla Electrónica de Servicios (VES). **2.)** De conformidad con lo indicado en correo electrónico del 24 de febrero de 2020, por el MPM. Mora Valdez, en su citada condición, autorizar a las personas que recomienda, para realizar los trámites que indica. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del MPM. Oslean Mora Valdez.

La Dirección Ejecutiva tomará nota para los fines correspondientes.

**ARTÍCULO VII**

**Documento N° 156-2020**

El Integrante Carlos Montero Zúñiga, manifiesta que el permiso con goce de salario y sustitución que el Consejo Superior había otorgado al licenciado Eduardo Chacón Monge, prosecretario a.í de la Secretaría General de la Corte, que finalizaba el 29 de febrero de 2020, con el objeto de colaborar a esa oficina con funciones de esta Junta Administradora, no se podrá prorrogar debido a las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Poder Judicial, por lo anterior, de conformidad con el “Convenio específico de cooperación interinstitucional y préstamo de recursos, suscrito entre el Poder Judicial y la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, aprobado por este órgano en sesión N° 1-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo III, **se acuerda lo siguiente**: **1.)** Autorizar a la Secretaría General de la Corte para que continúe con todos los procesos relativos a la documentación de la Junta Administradora del Fondo, a saber: **a.)** Recibir la documentación remitida por las personas gestionantes para conocimiento de la Junta Administradora. **b.)** Alimentar el sistema SICE asignado a esta Junta Administradora con la información que se reciba. **c.)** Búsqueda de antecedentes para la elaboración de cada gestión que se incluirá en las agendas de esta Junta Administradora. **d.)** Elaboración de las agendas. **e.)** Colaboración en las sesiones de la Junta Administradora, en cuanto a la asistencia, toma de apuntes y redacción de acuerdos. **f.)** Comunicación de los acuerdos tomados por esta Junta Administradora en las respectivas sesiones, ya sean mediante oficios, resoluciones, circulares, memorandos, etc. **g.)** Se autoriza para que los prosecretarios que asisten a las sesiones puedan firmar la documentación y posterior a esto los asistentes de prosecretarios realicen las comunicaciones, sin la necesidad de que sean firmados por la secretaria de la Junta Administradora. **h.)** Aprobación de las jubilaciones en el sistema SIGA- Fondo de Jubilaciones y Pensiones, por lo que deberán solicitar los permisos correspondientes para asignarlos a los funcionarios que se encargarán de dicha labor. **i.)** Elaboración de certificaciones relativas a actas y acuerdos que toma esta Junta Administradora. **j.)** Tener el perfil de seguridad del SICE asignado a esta Junta Administradora para asignar los permisos que se requieran al personal de esa Secretaría General. **k.)** Así como las funciones relativas a la plataforma de servicio, notificador y todas aquellas que no estén contempladas en el presente acuerdo, con la finalidad de no afectar el servicio público. **2.)** En razón de que la documentación la recibirá la citada Secretaría, deberán coordinar lo necesario con la integrante Lucrecia Ruiz Rojas, para trasladar la cuenta de correo electrónico oficial de esta Junta Administradora, al servidor que sea designado por ese despacho. **4.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del Consejo Superior. **Se declara acuerdo firme**.

**ARTÍCULO VIII**

**Documento N° 145-2020.**

El Consejo Superior en sesión número 36-2008, artículo XXXV, en lo que interesa, dispuso separar de su cargo por incapacidad absoluta y permanente al señor Pompilio Campos Bonilla, a partir del 16 de mayo de 2008, con derecho a los extremos laborales que le correspondan.

Posteriormente, en sesión de ese mismo Órgano, número 70-18del 7 de agosto de 2018, artículo XVII, se solicitó a la Dirección Jurídica que analizara la situación del jubilado Pompilio Campos Bonilla quien aparecía reportado ante la Caja Costarricense de Seguro Social por la empresa ASOTRAMA, bajo el tipo “Convenio” y determinara si contravenía la normativa que le resultaba aplicable, ya que su jubilación se otorgó por incapacidad absoluta y permanente.

La Máster Argili Gómez Siu y la licenciada Silvia Calvo Solano, por su orden, directora jurídica interina y coordinadora interina del Área de Análisis Jurídico de la Dirección Jurídica, remitieron el criterio jurídico número DJ-AJ-C-80-2020 del 26 de febrero del 2020, que literalmente dice:

“(…)

En atención al oficio **N° 8766-18** de 27 de agosto del 2018, de esa Secretaría, mediante el cual comunica el acuerdo adoptado por el **Consejo Superior**, en la sesión N° 70-18 celebrada el 7 de agosto del 2018, artículo XVII, le remito el informe solicitado.

1. **Antecedentes:**

Mediante oficio N° 8766-18 de 27 de agosto del 2018, suscrito por el señor Kenneth Aguilar Hernández, Prosecretario General interino de la Secretaría General de la Corte, se comunicó el acuerdo adoptado por el **Consejo Superior**, en la sesión N° 70-18 del 7 de agosto del 2018, artículo XVII, mediante el cual se acordó, entre otros: ***“3) Solicitar a la Dirección Jurídica analizar la situación del jubilado Pompilio Campos Bonilla quien aparece reportado ante la CCSS por la empresa ASOTRAMA, bajo el tipo “Convenio” y determine si contraviene la normativa que le resulta aplicable, ya que su jubilación se otorgó por incapacidad absoluta y permanente.”***

1. **Análisis:**

Primeramente, es importante señalar que las actuaciones de la Administración Pública se encuentran sujetas al **Principio de Legalidad Administrativa** establecido en los artículos 11 de la **Constitución Política** y 11 de la **Ley General de la Administración Pública**, de manera que, la Administración solo puede llevar a cabo actos, actuaciones o conductas previamente autorizadas o dispuestas en el ordenamiento jurídico.

El **Principio de Primacía de la Ley** señala que el ejercicio de un poder público debe realizarse de acuerdo con la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Este principio fundamental implica que los funcionarios públicos no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede.

En lo que se refiere al caso concreto, el **Consejo Superior**, en la sesión N° 70-18 celebrada el 7 de agosto del 2018, artículo XVII, conoció el oficio **N° 3299-DE-2018** de 26 de julio del 2018, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante el cual remitió el oficio **N° 820-TE-2018** de 26 de junio del 2018, en que se dan a conocer los resultados del cruce de bases de datos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial con la Caja Costarricense del Seguro Social, correspondiente al Primer Trimestre del 2018, en donde se registra al señor **Pompilio Campos Bonilla** -quien se encuentra jubilado por incapacidad absoluta y permanente- como una de las personas que laboró durante los meses de enero, febrero y marzo del 2018, para la Asociación Pro Defensa de los Trabajadores y del Medio Ambiente.

Al respecto, el **Consejo Superior** tomó el acuerdo cuya parte dispositiva, específicamente el punto 3 literalmente dice:

“**3)** Solicitar a la Dirección Jurídica que analice la situación del jubilado Pompilio Campos Bonilla quien aparece reportado ante la CCSS por la empresa ASOTRAMA, bajo el tipo “Convenio” y determine si contraviene la normativa que le resulta aplicable, ya que su jubilación se otorgó por incapacidad absoluta y permanente.”

De conformidad con lo señalado en el oficio remitido tenemos que:

1. El señor **Pompilio Campos Bonilla**, portador de la cédula de identidad N° 4-0125-0463, ostenta la condición de jubilado judicial al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 7333.
2. El Macroproceso Financiero Contable llevó a cabo el cruce de datos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial con la CCSS y determinó que don Pompilio prestó sus servicios a la **Asociación Pro-Defensa de los Trabajadores y del Medio Ambiente**, durante los meses de enero, febrero y marzo del 2018, reportándose un salario mensual en planilla de ¢1.785.000,00, sin haber suspendido el beneficio de la jubilación que recibe.

Al respecto es importante señalar que, el **Consejo Superior**, al conocer el oficio N° DML 2008-1234 del 12 de mayo del 2008 del Consejo Médico Forense, con motivo del reconocimiento médico legal realizado por el Departamento de Medicina Legal, en el que se concluyó que don Pompilio está incapacitado para realizar sus labores en el Poder Judicial en forma absoluta y permanente, dispuso separarlo de su cargo de Investigador 1 de la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial de Sarapiquí, a partir del 16 de mayo del 2008, con derecho a los extremos laborales que le correspondieran[[2]](#footnote-2).

Conforme a la información que se remite para estudio, la jubilación del señor Pompilio Campos Bonilla se rige por las disposiciones contempladas en la **Ley Orgánica del Poder Judicial N° 7333**.

En ese sentido, el artículo 234 de la **Ley Orgánica del Poder Judicial**, establece lo siguiente:

“**Artículo 234.-** Al jubilado o pensionado, se le suspenderá del goce del beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de las municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas de economía mixta.

También se podrá suspender, según las circunstancias, el goce del beneficio, cuando éste hubiera sido acordado en razón de enfermedad y se tenga noticia de que la persona está desempeñando otro empleo, mientras se mantenga esta última situación.” (Énfasis suplido).

La norma antes transcrita, señala los presupuestos por los cuales se debe suspender el goce del beneficio de la jubilación o pensión a aquellas personas jubiladas o pensionadas. Por un lado, el primer párrafo señala la posibilidad de suspender el beneficio durante todo el tiempo que esté percibiendo cualquier otro sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de las municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas de economía mixta, siendo este un párrafo de corte imperativo.

El segundo párrafo incluye también aquellas personas que debido a una enfermedad haya obtenido el goce del beneficio y que se tenga noticia de que está desempeñando otro empleo.

Obsérvese que el párrafo segundo de esta norma no hace ninguna distinción entre si es un empleo en el sector público o privado como sí lo distingue el párrafo primero; pero, por otro lado, se configura como un párrafo **facultativo para la Administración**, pues la norma indica que: “*… se podrá suspender, según las circunstancias, …*” (Énfasis suplido).

Es decir, el fin de dicha norma es impedir que la persona jubilada judicial mientras recibe una pensión por incapacidad absoluta y permanente, trabaje para una institución, organización o empresa para las cuales está imposibilitada, recibiendo dos pagos simultáneamente, de manera que si lo hace debe suspender el beneficio; sin embargo, **el legislador también dejó abierta la posibilidad, para aquellos casos en los que la persona inició labores remunerativas sin suspender el beneficio y, en este caso la norma autoriza al órgano competente para que sea éste quien valore y decida si suspende o no el goce del beneficio** durante el tiempo que esté la persona percibiendo cualquier otro sueldo, según las circunstancias, **cuando éste hubiera sido acordado en razón de enfermedad.**

En ese sentido, es importante indicar que las **asociaciones** son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de una forma estable, organizados democráticamente, sin ánimo de lucro e independiente, al menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas.

En el caso concreto, la escasa información que se pudo obtener fue vía telefónica a través del señor Walter Chavarría, quien dijo ser el coordinador de la Asociación Pro-Defensa de los Trabajadores y del Medio Ambiente, la cual cuenta con sucursales en Cariari, Guápiles, Puerto Viejo de Sarapiquí, Guácimo, Siquirres, Bataan, Limón y Sixaola. Además, indicó que dicha organización es sin fines de lucro y cuenta con un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social, mediante el cual, se brinda a las personas trabajadoras independientes un **Sistema voluntario de Aseguramiento Colectivo de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte**. También señaló que, en virtud de ese convenio, ASOTRAMA funge el papel de “Patrono”, pero que en realidad no lo es, por cuanto las personas afiliadas no trabajan para esa Asociación, sino que se hace para los efectos señalados en el convenio. En esa Asociación se afilian personas trabajadoras independientes que residen en la Zona Atlántica, y que necesitan mantenerse asegurados para recibir asistencia hospitalaria. No cuentan con información en internet; sin embargo, en la Red Social Facebook se promocionan de la siguiente manera:

“

[[](https://www.facebook.com/asotrama.siquirres?fref=nf&__tn__=,dm-R-R&eid=ARDxQWM9IA2byB0x_coxK8Ce4UIycgNNLSbVk_bspHXOgGr9zxjVI7d5jA3mpLzELCM9AwKW66kgWeQy)](https://www.facebook.com/asotrama.siquirres?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDxQWM9IA2byB0x_coxK8Ce4UIycgNNLSbVk_bspHXOgGr9zxjVI7d5jA3mpLzELCM9AwKW66kgWeQy" \o "Asotrama Siquirres" \t ")

[Asotrama Siquirres](https://www.facebook.com/asotrama.siquirres?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAaoQLLTX7qSmSAqF-TJXudUgdYOSFpcl_rcC1biwuUItS0qJATIwzv8bhioLrAnFvwYZOzTcQ4QzZy&hc_ref=ARSvi7JD_qNrP4_Ahkp9yi05N8W2g1cpg0gETcP6zZOfh81SK9ZppwdH_fzy_vJmxmo&fref=nf)

[18 de enero de 2012](https://www.facebook.com/asotrama.siquirres/posts/253520388055259) ·

ASOTRAMA les ofrece el seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social, para trabajadores independientes, estamos ubicados en toda la Zona Atlántica de Costa Rica, recuerde que una consulta en la caja sin tener seguro social le puede ocasionar serios problemas económicos sin dejar de mencionar los de salud por no tener un seguro, atravez nuestro se cotiza E y M, IVM, llámenos y con gusto le brindamos más información Cariari 27676651 Guápiles 27104772, Pt Viejo Sarapiquí 27666657,Guacimo 27165434, Siquirres 27687639, Bataan 27187668, Limón 27588061, Sixaola 27510969

Principio del formulario

En ese sentido, es claro que el caso del señor Pompilio Campos Bonilla no está dentro de las limitaciones establecidas en el párrafo primero del artículo 234 precitado, sino que se enmarca dentro del presupuesto de hecho señalado en el párrafo segundo del citado artículo, por cuanto fue jubilado por incapacidad absoluta y permanente y, por lo tanto, al órgano competente le corresponde valorar si en su criterio, la información disponible hasta este momento, le resulta suficiente para tomar la decisión de suspender o no el disfrute de su beneficio.

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que el **Consejo Superior** hasta el 26 de enero del 2020 atendió las actividades sustantivas de las gestiones propias del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y a partir del 27 de enero del 2020 inició funciones la **Junta Administradora** del citado Fondo. Dicha **Junta** se encarga de administrar los aportes de las personas servidoras activas, jubiladas y pensionadas, así como el aporte patronal y estatal y atender todas las gestiones propias del Fondo.

En ese sentido, es necesario señalar que, hasta el 26 de enero del 2020, correspondía al **Consejo Superior**, ejercer esa competencia. A partir del 27 de enero del 2020 le corresponde a la Junta Administradora del citado Fondo y en caso de conocerse una situación al amparo de la normativa correspondiente a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 7333, la Junta Administradora analizaráatendiendo a las circunstancias y decidirá si utilizaba o no la **facultad** otorgada por la misma norma.

En este mismo sentido se emitió el criterio jurídico comunicado al **Consejo Superior** mediante oficio N° **DJ-AJ-4872-2017** de 5 de diciembre del 2017, suscrito por el licenciado Jorge Kepfer Chinchilla y la máster Argili Gómez Siu, por su orden, Coordinador del Área de Análisis Jurídico en aquel momento y Subdirectora Jurídica interina, el cual fue aprobado en la sesión N° 112-17 celebrada el 14 de diciembre del 2017, artículo LVII, y que en lo que interesa literalmente dice:

**“IV.- Conclusiones y recomendaciones:**

De conformidad con todo lo antes señalado, se concluye lo siguiente:

**1.-** El presente informe debe manejarse de manera **confidencial,** porque **contiene datos sensibles** relacionados con el tema de la salud, es decir, con la causa de la incapacidad permanente y absoluta de las 23 personas incluidas; lo anterior de conformidad con la ley número 8968, titulada ***“Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”*** de 7 de julio del 2011, artículos 3 inciso e) y 9 inciso 1).

**2.-** Con fundamento en el Principio de Legalidad Administrativa (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), así como lo dispuesto en el artículo 234 párrafo 2° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponderá al Consejo Superior  decidir si opta o no, por suspender el beneficio de la jubilación durante el tiempo que la persona (jubilada por incapacidad absoluta y permanente), laboró y en consecuencia, fue reportada en la planilla de la CCSS.  Para esto, considera la Dirección Jurídica que lo ideal sería contar con una **nueva** valoración médica acerca de la evolución de la enfermedad de cada persona, para determinar si la persona sigue en estado de incapacidad permanente y absoluta, o si su salud ha mejorado, y ya no tiene esa condición.  Dicho estudio médico escapa las posibilidades materiales y de competencia de la Dirección Jurídica.  No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo del Consejo Superior que da lugar al presente informe, la Dirección Jurídica logró recopilar y organizar información básica relacionada con las circunstancias que presenta cada uno de los casos de las 23 personas incluidas en la lista.  Dicha información se obtuvo a partir de los datos que remitió la Dirección de Gestión Humana en el oficio N° 2610-AP-17 SICE- 10087 de 27 de junio del 2017.Para el análisis individualizado de cada caso, el Consejo Superior deberá considerar todos los aspectos señalados en el presente informe.

**3.-** Según observó la Dirección Jurídica, en los casos de las 23 personas cuya información se incluyó en el presente informe, sus edades se ubican en un rango entre los 49 y los 66 años.  Además, de los 23 casos, 17 tienen una jubilación por un monto inferior a un millón de colones; 2 personas tienen una jubilación ubicada en el rango entre un millón y un millón y medio de colones; por último 4 personas tienen una jubilación ubicada en el rango entre un millón y medio hasta dos millones doscientos mil colones. El legislador dio un amplio margen a la Administración (Consejo Superior) para valorar las circunstancias que presenta cada caso, a fin de decidir si ordena la suspensión del beneficio de la jubilación. Esto se afirma por cuanto, el texto del artículo 234 párrafo 2° de la Ley Orgánica del Poder Judicial no señala más límite que la valoración de las circunstancias.  Sin embargo, debe tenerse presente que la Constitución Política y los Instrumentos Internacionales, establecen el respeto a la dignidad de las personas y también la obligación del Estado de no dar un trato desigual a las personas que se encuentren en la misma situación.

**4.-** La Dirección Jurídica considera conveniente y recomienda, que el Consejo Superior comunique a las personas que están en esa condición (jubiladas por incapacidad absoluta y permanente que aparecen reportadas en la planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social), que para acreditar su buena fe, **voluntariamente** se acerquen a solicitar una revaloración de su caso. Esta medida tiene la ventaja de que, se protegen los intereses del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, y no se hace ninguna diferencia que conduzca a una “eventual discriminación” entre el trato que se dé a unas personas en relación a otras.  Lo anterior, en vista de que **el artículo 234 párrafo 2° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, da la facultad al Consejo Superior, de no suspender el goce del beneficio.** No obstante lo anterior, es oportuno señalar que dicha norma, al ser facultativa, también puede válidamente sustentar que el Consejo Superior opte por lo contrario, es decir, por disponer la suspensión del goce del beneficio, mientras se mantenga la situación (la persona está desempeñándose en otro empleo).

**5.-** En síntesis, **corresponde al Consejo Superior decidir si utiliza o no esa facultad**; para esto, dicho órgano valorará si en su criterio, la información disponible hasta este momento, le resulta suficiente para tomar la decisión, por cuanto, desde el punto de vista legal, ambas posibilidades son válidas.”

- 0 -

**Se acordó:**Tener por rendido el informe oficio N° DJ-AJ-4872-2017 de la Dirección Jurídica.”

1. **Conclusiones:**

Así las cosas, esta Dirección Jurídica, conforme lo señalan los artículos 234 y 235 de la **Ley Orgánica del Poder Judicial N° 7333** (aplicable a la jubilación del señor Pompilio Campos Bonilla), el Principio de Legalidad Administrativa contenido en los artículos 11 de la **Constitución Política** y 11 de la **Ley General de la Administración Pública**, el artículo 239 de la **Ley Orgánica del Poder Judicial**, según reforma introducida mediante la **Ley N° 9544** del 24 de abril del 2018, publicada el 22 de mayo del 2018, denominada **Reforma al título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 7333 (del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial)**,así como lo anteriormente expuesto, concluye:

* 1. El caso del señor **Pompilio Campos Bonilla** no está dentro de las limitaciones establecidas en el párrafo primero del artículo 234 de la **Ley Orgánica del Poder Judicial N° 7333**, porque la Asociación Pro Defensa de los Trabajadores y del Medio Ambiente no pertenece al Estado, sino que, se enmarca en el presupuesto de hecho señalado en el párrafo segundo del citado artículo, por cuanto fue jubilado por incapacidad absoluta y permanente y, por lo tanto, el **órgano competente puede -según las circunstancias- valorar y decidir si suspende o no el goce del beneficio**, pues está facultado legalmente para ello.
  2. A partir de la entrada en vigencia de la **Ley N° 9544** del 24 de abril del 2018, publicada el 22 de mayo del 2018, denominada **Reforma al título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 7333 (del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial)**, se le otorga a la **Junta Administradora del citado Fondo**, la competencia para administrar el **Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial**.

Conforme lo expuesto se deja rendido el informe solicitado, a efecto de que el Consejo Superior en el ejercicio de las competencias que tiene asignadas decida lo que corresponda, en atención al bloque de legalidad que rige en el Poder Judicial.

(…)”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tomar nota del criterio jurídico vertido en oficio número DJ-AJ-C-80-2020 del 26 de febrero del 2020, por la máster Argili Gómez Siu y la licenciada Silvia Calvo Solano, por su orden, directora jurídica interina y coordinadora interina del Área de Análisis Jurídico de la Dirección Jurídica, mediante el cual se analizó la situación del jubilado judicial Pompilio Campos Bonilla y se determina que el señor Campos Bonilla, no está dentro de las limitaciones establecidas en el párrafo primero del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 7333, en razón que la Asociación Pro Defensa de los Trabajadores y Medio Ambiente no pertenece al Estado. **2.)** Informarle al señor Pompilio Campos Bonilla, que debido a que su jubilación fue otorgada por incapacidad absoluta y permanente, mediante acto firme emitido por el Consejo Superior en sesión número 36-2008, artículo XXXV, aún mantiene imposibilidad de trabajar, en ese sentido, se le suspenderá el beneficio de jubilación cuando se detecte que esté trabajando. **3.)** Solicitar al Departamento Financiero Contable que verifique si existen sumas giradas en demasía que deban ser devueltas por el señor Pompilio Campos Bonilla al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. **4.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del señor Campos Bonilla.

Las Direcciones Jurídica, de Gestión Humana y el Departamento Financiero Contable, tomarán nota para los fines correspondientes.

**ARTÍCULO IX**

**Documento N° 147-2020.**

En sesión número 04-2020, del 17 de febrero de 2020, artículo IV, de conformidad con el convenio de cooperación suscrito por esta Junta Administradora y el Poder Judicial,sesolicitó a la Dirección de Gestión Humana que en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información, implementaran el mecanismo propuesto en esa oportunidad por la Dirección Ejecutiva, el cual permitiría que en línea, una vez se dé la aprobación por parte de esta Junta Administradora, se incluya al pensionado en planillas, de forma tal que su pago no dependa de ninguna aprobación manual de otra oficina.

La máster Roxana Arrieta Meléndez, la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Directora interina Subdirectora interina jefe interino de Administración de Personal y coordinador interina de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, todos de Gestión Humana, en oficio número PJ-DGH-AP-0715-AP-2020, del 27 de febrero de 2020, remitieron lo siguiente:

“Se remite el presente oficio para que los honorables miembros de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones dispongan de un panorama más amplio en cuanto al proceso y los tiempos de atención de las gestiones de pensión, ampliando así la información aportada por la Dirección Ejecutiva por medio del informe N°483-DE-2020, de fecha 6 de febrero 2020.

Primeramente, es indispensable para la Dirección de Gestión Humana manifestar a los señores y señoras que conforman la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que esta Dirección tiene el compromiso de trabajar día a día con la mayor mística y esfuerzo posible en pro del bienestar de la población judicial jubilada y pensionada, por lo cual cualquier iniciativa que desde el marco regulatorio sea factible implementar, será adoptada con el mayor de los beneplácitos en aras de mejorar los servicios y la atención que merecen los destinatarios finales de nuestra labor.

En línea con lo anterior, esta Dirección aprovecha la oportunidad para que, en coordinación con la Junta Administradora del Fondo, se puedan establecer los canales de comunicación necesarios para lograr la disminución de los tiempos que previo a la entrada en ejercicio de funciones de la Junta, requiere la comunicación, toma del acuerdo y notificación del mismo a la Dirección, para el pago efectivo del derecho aprobado.

Si se considera que la agenda de la Junta Administradora del Fondo tiene un carácter más específico en cuanto a los temas sometidos a su conocimiento, contrario a las agendas del Consejo Superior que por su competencia debe conocer de muchos otros temas, estimaríamos una disminución de los tiempos requeridos para la ejecución de las comunicaciones y la toma de acuerdos, labores que abordadas en conjunto podrían generar mayor celeridad al proceso.

Ahora bien, en cuanto al proceso actual como tal, considera oportuno la Dirección de gestión Humana ampliar el informe N° 483-DE-2020 en los puntos siguientes:

Como primer punto, es imperioso aclarar que la contabilidad de los días que se indica en el informe 126-TE-2020 del Departamento Financiero Contable, toma como punto de inicio la fecha de la sesión en la cual se da la aprobación de la pensión por parte del Consejo Superior, no obstante, se debe señalar que el acuerdo en firme con el cual la Dirección de Gestión Humana puede iniciar el trámite en el Sistema, se notifica a la cuenta de correo oficial de esta Dirección con una posterioridad que va de los 7 hasta los 22 días en algunos de los casos, tiempo durante el cual no tiene la Dirección de Gestión Humana el insumo requerido para tramitar la pensión a nivel de sistema.

Segundo; otro de los aspectos que se deben informar, es que para el trámite de cada planilla de jubilados y pensionados, el Departamento Financiero Contable define en cada quincena un cronograma de pago con fechas de corte para la inclusión y aprobación de registros, el cual en promedio es de cinco días hábiles, por lo cual, la inclusión de un beneficio de pensión para efectos de pago, debe respetar de forma **ineludible** las fechas establecidas por Financiero, provocando con esto que en algunos casos el registro de pensión se deba postergar para su pago en la siguiente quincena, sin que esta dilación pueda ser considerada una inacción de parte de la Dirección de Gestión Humana.

Tercero, el análisis de los tiempos reportados en el oficio 126-TE-2020, no considera que para los casos en los cuales se reporta mayor dilación en la aprobación del registro de pensión, se dan durante el transcurso del cierre colectivo 2019/2020 que dispone el Poder Judicial, situación que por sí sola significa un lapso de 16 días naturales en los cuales no es posible la tramitación de los casos, reservando la planilla a la cancelación de las jubilaciones y pensiones activas y en curso de pago previo al cierre.

Cuarto, también es necesario aclarar, que en casos como las pensiones aprobadas a los señores Emmanuel Fernández López y al señor Álvaro Cortés Ramírez, fue necesario solicitar a la Secretaría General de la Corte aclaraciones sobre los acuerdos tomados, esto debido a que la transcripción generaba confusión en torno a los porcentajes o montos a cancelar. Cuando se presentan situaciones como la descrita, se debe solicitar a la Secretaría General de la Corte que realice una aclaración sobre la parte dispositiva del acuerdo, la cual es comunicada como una “reproducción por error”, notificación que al final impacta en los tiempos de trámite de los beneficios tal y como aconteció con los casos citados.

Luego de las aclaraciones realizadas, se obtienen los tiempos reales conforme la tabla de casos reportada por el Departamento Financiero Contable:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Nombre** | **Fecha de sesión acuerdo Consejo Superior** | **Fecha que se recibe en GH el acuerdo del Consejo Superior** | **Fecha de Aprobación final de GH** | **Tiempo trascurrido entre la asignación del SICE y la aprobación final de GH** |
| 07-0042-0683 | Diomeses Acosta Acosta | 10/10/2019 | 30/10/2019 | 6/11/2019 | 7 días |
| 01-1885-0046 | Valeria Durán Aguilar | 22/10/2019 | 31/10/2019 | 21/11/2019 | 21 días |
| 01-0355-0960 | Leda María Chavarría Mendoza | 22/10/2019 | 11/11/2019 | 18/11/2019 | 7 días |
| 01-0906-0627 | Kattia Vanessa Arias Chinchilla | 24/10/2019 | 15/11/2019 | 20/11/2019 | 5 días |
| 02-0170-0304 | LIDIETTE ALFARO JARA **\*** | 26/11/2019 | 19/12/2019 | 21/1/2020 | 17 días |
| 01-2079-0798 | EMMANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ **\*\*** | 26/11/2019 | 05/12/2019 | 6/12/2019 | 1 día |
| 01-0550-0492 | Álvaro Cortés Ramírez **\*\*** | 10/10/2019 | 03/12/2019 | 6/12/2019 | 3 días |
| 07-0330-0015 | GABRIEL ALONSO BOLAÑOS VILLEGAS | 26/11/2019 | 2/12/2019 | 4/12/2019 | 2 días |
| 01-0645-0435 | LIGIA VIRGINIA AZOFEIFA CHAVES | 28/11/2019 | 9/12/2019 | 16/12/2019 | 7 días |
| 04-0097-0522 | MARÍA EUGENIA LIZANO CALIVA **\*\*\*** | 10/12/2019 | 16/12/2019 | 21/1/2020 | 36 días |

**\*** Los casos corresponden a pensiones que debido a su fecha de ingreso a Gestión Humana y al cronograma de pago del Departamento Financiero Contable, se afectó su tramitación debido al cierre colectivo 2019/2020.

**\*\*** Los registros corresponden a casos en los cuales se debió solicitar a la Secretaría General de la Corte, aclaración sobre la parte dispositiva del acuerdo, aumentando así el tiempo de inclusión para pago.

**\*\*\*** El caso ingresa a la Dirección de Gestión Humana al rige del cierre colectivo. Posterior al ingreso del cierre, las fechas de corte de planilla establecidas por Financiero Contable no permiten la aprobación de la pensión en sistema para la primera quincena de enero, quedando su ejecución de forma forzosa para segunda quincena de enero 2020.

Una vez realizadas las aclaraciones del caso, puede observarse que los tiempos de respuesta de esta Dirección denotan celeridad en la inclusión de los registros de pensión al sistema de pago, con la excepción del caso de la señora María Eugenia Lizano Caliva, cuyo caso se aprueba y comunica al momento de iniciar el cierre colectivo 2019/2020, punto ampliamente explicado en el presente oficio.”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tomar notade lo comunicado por Dirección de Gestión Humana en oficio número PJ-DGH-AP-0715-AP-2020, del 27 de febrero de 2020. **2.)** Se informa a la citada Dirección que esta Junta Administradora en sesión número 4-2020, del 17 de febrero de 2020, artículo IV, conoció el oficio número 483-DE-2020 del 6 de febrero de 2020, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, relacionado con el tiempo que demoran los trámites de otorgamiento de pensiones y en esa oportunidad se dispuso, de conformidad con el convenio de cooperación suscrito por esta Junta Administradora y el Poder Judicial, solicitar a la Dirección de Gestión Humana que en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información, implementaran el mecanismo propuesto en ese momento por la Dirección Ejecutiva.

**ARTÍCULO X**

**Documento N° 144-2020**

La máster Roxana Arrieta Meléndez, la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Directora a.í, Subdirectora a.í, jefe a.í de Administración de Personal y coordinador a.í de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, todos de Gestión Humana, mediante oficio N° PJ-DGH-AP-0752-2020 del 24 de febrero de 2020, remitieron la siguiente gestión:

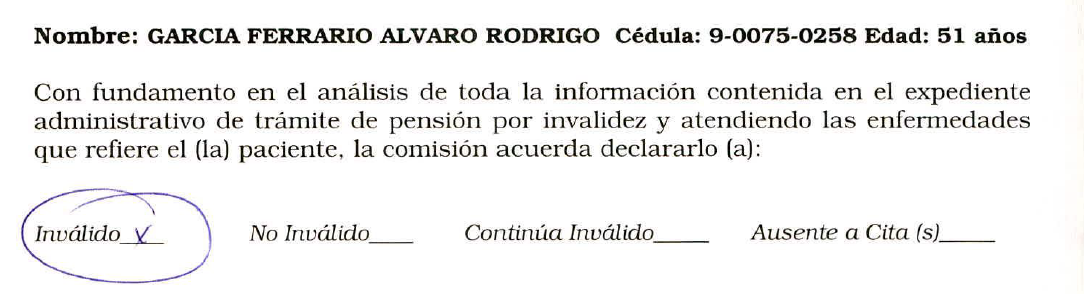
“(…)

Para los efectos del conocimiento del Consejo Superior, se detallan las acciones aplicadas y los resultados obtenidos de la ejecución de lo dispuesto por el órgano superior en el acuerdo de la sesión 16-2019, artículo LXXVII.

1. **Antecedentes del caso.**

* El Consejo Superior, por medio del acuerdo de la sesión 16-2019, celebrada el 22 de febrero 2019, artículo LXXVII dispuso: “**1.)** Trasladar a la Dirección de Gestión Humana la gestión anterior con el propósito que remita al doctor Álvaro Gar-cía Ferrario, Jefe de la Unidad Médico Legal de Santa Cruz y Nicoya a valoración de la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que con base en lo indicado y las diligencias aportadas, sea esta la que determine si corresponde la jubilación por incapacidad absoluta y permanente. **2.)** Hacer de este acuerdo de conocimiento del doctor García Ferrario.”
* Conforme al acuerdo citado, el día 03 de mayo 2019, la Dirección de Gestión Humana traslada el expediente del señor García Ferrario a la Dirección de Calificación de la Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social, en apego al protocolo establecido al efecto.
* Acto seguido, en la sesión de Consejo Superior N° 48-19, celebrada el 24 de mayo del 2019, articulo II, se acordó: “**1)** Confirmar el acto administrativo apelado, seguido contra Álvaro García Ferrario, Médico Forense de Santa Cruz Guanacaste, mediante el cual se declaró con lugar la causa disciplinaria, se calificó de gravísima la falta cometida y se le impuso la sanción de revocatoria de nombramiento, la cual rige a partir del 27 de mayo de 2019.”
* En la revisión del expediente médico remitido por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez, se encuentra el documento “Dictamen de Evaluación de Invalidez”, fechado el 13 de noviembre 2019, en el cual en el apartado No. 12, “Historia clínica”, el Dr. Álvaro García Ferrario le manifiesta al médico encargado de la valoración: **“Indica haber sido cesado de sus funciones como médico forense en el Poder Judicial desde mayo.”**

* La Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez, analiza los estudios practicados al señor García Ferrario y conforme a los resultados, el 27 de noviembre de 2019, en sesión N°548-2019, concluye en lo que interesa lo siguiente:



* Finalmente, el 20 de diciembre de 2019, la Dirección de Calificación de la Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social, remite el expediente del señor Álvaro Rodrigo García Ferrario, en el cual se encuentra agregada la fórmula denominada “Hoja de criterio de Comisión”. *El expediente completo se inserta al final de este documento.*

De esta forma, se muestra al Consejo Superior la cronología de los hechos relevantes, asociados al trámite de lo dispuesto por el órgano superior en la sesión N° 16-2019, artículo LXXVII, celebrada el 22 de febrero 2019.

(…)”

- 0 -

Conforme a lo resuelto por el Consejo Superior de este Poder Judicial mediante sesión N° 48-19 celebrada el 24 de mayo del 2019, artículo II, en el que se le impuso la sanción de revocatoria de nombramiento al señor Álvaro García Ferrario, a la sazón Médico Forense de Santa Cruz Guanacaste, a partir del 27 de mayo de 2019, **se acuerda: 1.)** Tomar nota de lo resuelto por la Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez, en sesión N°548-2019 de 27 de noviembre de 2019, referente a los estudios practicados al señor García Ferrario en el que se concluye que su condición de salud es de invalidez, lo cual fue remitido por la máster Roxana Arrieta Meléndez, la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Directora a.í, Subdirectora a.í, jefe a.í de Administración de Personal y coordinador a.í de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, todos de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-AP-0752-2020 del 24 de febrero de 2020. **2.)** En razón de lo resuelto por el Consejo Superior, no es procedente ante esta Junta Administradora la tramitación de la jubilación por incapacidad absoluta y permanente, por tratarse de un ex funcionario judicial.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo que corresponda.

**ARTÍCULO XI**

**Documento N° 140-2020**

**Antecedente:**

En sesión N° 3-2020 celebrada el 10 de febrero del 2020, artículo XV, en lo que interesa, esta Junta Administradora acordó lo siguiente:

“(…)

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el oficio N° oficio N° PJ-DGH-AP-517-2020 del 3 de enero 2020, suscrito la máster Roxana Arrieta Meléndez, la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Juan José Carvajal Siles y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, directora a.í, subdirectora a.í, jefe de Administración de Personal a.í y coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones a.í, todos de Gestión Humana. **2.)** Acoger parcialmente la recomendación emitida PJ-DGH-AP-229-2020 del 3 de febrero de 2020, en consecuencia, aprobar el beneficio de pensión solicitado por la señora María Lidia Carballo Rodríguez, en calidad de esposa del jubilado judicial fallecido Álvaro Orozco Saborío, a partir del 9 de julio de 2019, cuya asignación mensual será del 80 % sobre el monto de jubilación que percibía en vida el señor Orozco Saborío. **3.)** Indicarle a la Dirección de Gestión Humana y al Departamento de Trabajo Social y Sicología, que no es necesario que recomienden un porcentaje de pensión para cada gestionante, en razón de que es competencia de esta Junta Administradora valorar y definir cuál será el porcentaje que se otorgará a cada persona beneficiaria, por lo que se solicita incluir dentro del informe el monto máximo de pensión que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial podría recibir la persona o personas gestionantes. **4.)** Asimismo, se le indica a la Dirección de Gestión Humana que, en razón de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el “reglamento al Título IX de la LOPJ” que se menciona en el informe ya no está vigente, por lo que deben aplicar lo que se encuentra actualmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. **5.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la señora María Lidia Carballo Rodríguez.”

(…)”

- 0 -

Con base en lo anterior, mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2020, la señora Maria Lidia Carballo Rodríguez, solicitó lo siguiente:

“En razón de la resolución y gestiones de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y sus fundamentos, respetuosamente solicito:

1-En razón de haberse suprimido el reglamento al artículo IX De la LOPJ, se me conceda por monto de pensión por viudez el que recibirá mi esposo en cuanto funcionario jubilado del poder Judicial, según determina la LOPJ.

2- Aumentada en cuanto la pensión de mi difunto esposo debía ser equiparada a la de los jueces que vinieron a sustituir los alcaldes civiles, según la normativa mencionada en el Oficio 52-2020 y concordante y el artículo constitucional sobre igualdad.”

- 0 -

En razón que el título IX del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 7333, fue reformado mediante Legislación N° 9544 y en lo conducente señala en su artículo 229 que: “*El monto de las prestaciones de pensión por sobrevivencia en los casos de viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será proporcional al monto de pensión que recibía el pensionado al momento de fallecer, y en su conjunto este monto no será mayor al ochenta por ciento (80%) de lo que correspondía al causante. En caso de muerte de un servidor activo, la cuantía de la pensión por viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será proporcional al monto de pensión que hubiera recibido el fallecido de acuerdo con el cumplimiento de requisitos en el momento de la contingencia, y en su conjunto este monto no será mayor al ochenta por ciento (80%) de lo que le hubiera correspondido al causante”,* a esos efectos*,* siendo que el hecho generador para el otorgamiento de pensión a la señora María Lidia Carballo Rodríguez, en calidad de esposa del jubilado judicial fallecido Álvaro Orozco Saborío, surgió en presencia de dicha reforma,**se acuerda: 1.)** Denegar la gestión presentada por la señora María Lidia Carballo Rodríguez, al amparo de la legislación vigente para el otorgamiento de pensiones en la Ley Orgánica del Poder Judicial. **2.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la gestionante.

**ARTÍCULO XII**

**Documento N° 128-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1715-2020 del 20 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XXXIX, que literalmente dice:

“La máster Roxana Arrieta Meléndez, la licenciada Olga Guerrero Córdoba y la licenciada Maureen Siles Mata, por su orden, Directora interina, Subdirectora interina de Gestión Humana y Jefa de Subproceso Administración Humana, en oficio Nº PJ-DGH-SAS-0011-2020del 9 de enero de 2020, comunicaron lo siguiente:

“**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | SIVIANY ALBERTO CORELLA MURILLO | |
| **N° CEDULA:** | 07-0184-0848 | |
| **PUESTO:** | INVESTIGADOR 1 | |
| **OFICINA:** | DIRECCION GENERAL | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 16/05/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 16/05/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2019117 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 9 años y 3 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢18,562,744.62 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Seguridad Pública |
| **OBSERVACIONES:** | El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | La persona solicitante no manifiesta objeción con el estudio realizado. | |
| **RECOMENDACIONES:** | Aprobar el estudio de Reconocimiento de Tiempo servido en otras instituciones del Estado N° DE **RTFJP: 2019117** a partir de la fecha en que completa la gestión, es decir 16/05/2019. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva transitoriamente el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, según lo establecido en el Transitorio I de la Ley N° 9544, y en concordancia con el artículo 81 inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333) y lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019117 (fecha de rige 16/05/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda.

Cabe indicar que, en caso de aprobarse el estudio, el tiempo total a reconocer es de **9 años y 3 días**, tiempo por el cual el servidor deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de **¢18,562,744.62**.”

- 0 -

En razón que la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, asimismo con vista en el informe de la Dirección de Gestión Humana en oficio N° PJ-DGH-SAS-0004-2020 del 9 de enero de 2020. **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos de anualidades **únicamente,** al servidor Siviany Alberto Corella Murillo, Investigador de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, 9 años, 3 días, laborados para el Ministerio de Seguridad Pública, a partir del 16 de mayo de 2019. **2.)** Dado que este Consejo no es competente para hacer el reconocimiento para efectos jubilatorios, se traslada la gestión supra a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial para el trámite pertinente. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del gestionante.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo que corresponda**.**”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XXXI, en donde se conoció el informe Nº PJ-DGH-SAS-0011-2020del 9 de enero de 2020 emitido por la Dirección de Gestión Humana, referente al reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades tramitado por el servidor Siviany Alberto Corella Murillo, Investigador de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial. **2.)** En razón de que el informe Nº PJ-DGH-SAS-0011-2020, indica que el servidor Corella Murillo también gestionó solicitud para efectos jubilatorios, se aprueba el trámite de reconocimiento de tiempo servido para esos efectos, por lo que deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de ¢18,562,744.62 (dieciocho millones quinientos sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro colones con sesenta y dos céntimos), correspondiente a 9 años y 3 días**,** laborados para el Ministerio de Seguridad Pública, con la advertencia de que el reconocimiento se materializará hasta la cancelación total del monto adeudado, que se le deducirá de su salario en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, números CR45015201229000003291 en el Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado, el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana.

El Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO XIII**

**Documento N° 125-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1717-2020 del 20 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XXXVIII, que literalmente dice:

“Las máster Roxana Arrieta Meléndez y Olga Guerrero Córdoba, y la licenciada Mauren Siles Mata, por su orden, Directora interina, Subdirectora interina del Proceso de Administración Humana y Jefa interina del Subproceso Administración Salarial de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAS-0008-2020 del 9 de enero de 2020, remitieron:

**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | STEVE RAMON MOLINA SERRANO | |
| **N° CEDULA:** | 02-0639-0766 | |
| **PUESTO:** | CUSTODIO DE DETENIDOS | |
| **OFICINA:** | SECCION DE CARCELES II CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | [stevemose@hotmail.es](mailto:stevemose@hotmail.es) | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 15/03/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 15/03/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2019100 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 10 años, 2 meses y 5 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢22,091,793.88 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Seguridad Pública |
| **OBSERVACIONES:** | El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | La persona solicitante no manifiesta objeción con el estudio realizado. | |
| **RECOMENDACIONES:** | Aprobar el estudio de Reconocimiento de Tiempo servido en otras instituciones del Estado N° **RTFJP: 2019100** a partir de la fecha en que completa la gestión, es decir 15/03/2019. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva transitoriamente el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, según lo establecido en el Transitorio I de la Ley N° 9544, y en concordancia con el artículo 81 inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333) y lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019100 (fecha de rige 15/03/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda.

Cabe indicar que, en caso de aprobarse el estudio, el tiempo total a reconocer es de **10 años, 2 meses y 5 días**, tiempo por el cual el servidor deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de **¢22,091,793.88.”**

- 0 -

En razón que la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, asimismo con vista en el informe de la Dirección de Gestión Humana en oficio N° PJ-DGH-SAS-0004-2020 del 9 de enero de 2020. **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos de anualidades **únicamente,** al servidor Steve Ramón Molina Serrano, Custodio de Detenidos del Segundo Circuito Judicial de San José 10 años, 2 meses y 5 días, laborados para el Ministerio de Seguridad Pública, a partir del 15 de marzo de 2019. **2.)** Dado que este Consejo no es competente para hacer el reconocimiento para efectos jubilatorios, se traslada la gestión supra a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial para el trámite pertinente. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del gestionante.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo que corresponda**.”**

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XXXVIII, en donde se conoció el informe N° PJ-DGH-SAS-0008-2020 del 9 de enero de 2020 emitido por la Dirección de Gestión Humana, referente al reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades tramitado por el servidor Steve Ramón Molina Serrano, Custodio de Detenidos del Segundo Circuito Judicial. **2.)** En razón de que el informe N° PJ-DGH-SAS-0008-2020 indica que el servidor Molina Serrano, también gestionó solicitud para efectos jubilatorios, se aprueba el trámite de reconocimiento de tiempo servido para esos efectos, por lo que deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de ¢22.091.793,88 (veintidós millones noventa y un mil setecientos noventa y tres colones con ochenta y ocho céntimos), correspondiente a 10 años, 2 meses y 5 días, laborados para el Ministerio de Seguridad Pública, con la advertencia de que el reconocimiento se materializará hasta la cancelación total del monto adeudado, que se le deducirá de su salario en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, números CR45015201229000003291 en el Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana.

El Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO XIV**

**Documento N° 124-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1716-2020 del 20 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XXXVII, que literalmente dice:

“Las máster Roxana Arrieta Meléndez y Olga Guerrero Córdoba, y la licenciada Mauren Siles Mata, por su orden, Directora interina, Subdirectora interina del Proceso de Administración Humana y Jefa interina del Subproceso Administración Salarial de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAS-0004-2020 del 9 de enero de 2020, remitieron:

**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | VICTOR LUIS MORENO ROJAS | |
| **N° CEDULA:** | 01-1111-0584 | |
| **PUESTO:** | AGENTE PROTECCIÓN 1 | |
| **OFICINA:** | UNIDAD DE PROTECCION DE VICTIMAS Y TESTIGOS | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 12/07/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 12/07/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | **2019133** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 3 años, 9 meses y 21 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢7,379,599.19 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Obras Pub. y Transp. - MOPT |
| **OBSERVACIONES:** | El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | La persona solicitante no manifiesta objeción con el estudio realizado. | |
| **RECOMENDACIONES:** | Aprobar el estudio de Reconocimiento de Tiempo servido en otras instituciones del Estado N° **RTFJP: 2019133** a partir de la fecha en que completa la gestión, es decir 12/07/2019. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva transitoriamente el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, según lo establecido en el Transitorio I de la Ley N° 9544, y en concordancia con el artículo 81 inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333) y lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019133 (fecha de rige 12/07/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda.

Cabe indicar que, en caso de aprobarse el estudio, el tiempo total a reconocer es de **3 años, 9 meses y 21 días**, tiempo por el cual el servidor deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de **¢7,379,599.19.”**

- 0 -

**Antecedentes**

1. La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.
2. Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020.

- 0 -

En razón que la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, asimismo con vista en el informe de la Dirección de Gestión Humana en oficio N° PJ-DGH-SAS-0004-2020 del 9 de enero de 2020. **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos de anualidades **únicamente,** al servidor Victor Luis Moreno Rojas 3, Agente Protección de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, 3 años, 9 meses y 21 días, laborados para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a partir del 12 de julio de 2019. **2.)** Dado que este Consejo no es competente para hacer el reconocimiento para efectos jubilatorios, se traslada la gestión supra a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial para el trámite pertinente. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del gestionante.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo que corresponda**.”**

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XXXVII, en donde se conoció el informe N° PJ-DGH-SAS-0004-2020 del 9 de enero de 2020 emitido por la Dirección de Gestión Humana, referente al reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades tramitado por el servidor Victor Luis Moreno Rojas 3, Agente Protección de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. **2.)** En razón de que el informe N° PJ-DGH-SAS-0004-2020 indica que el servidor Moreno Rojas, también gestionó solicitud para efectos jubilatorios, se aprueba el trámite de reconocimiento de tiempo servido para esos efectos, por lo que deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de ¢7.379.599,19 (siete millones trescientos setenta y nueve mil quinientos noventa y nueve colones con diecinueve céntimos) correspondiente a 3 años, 9 meses y 21 días, laborados para el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), con la advertencia de que el reconocimiento se materializará hasta la cancelación total del monto adeudado, que se le deducirá de su salario en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, números CR45015201229000003291 en el Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana.

El Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO XV**

**Documento N° 129-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1718-2020 del 20 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XL, que literalmente dice:

“Las máster Roxana Arrieta Meléndez y Olga Guerrero Córdoba, y la licenciada Mauren Siles Mata, por su orden, Directora interina, Subdirectora interina del Proceso de Administración Humana y Jefa interina del Subproceso Administración Salarial de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAS-0008-2020 del 9 de enero de 2020, remitieron:

**“Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | DAVID PORRAS MEZA | |
| **N° CEDULA:** | 01-1434-0259 | |
| **PUESTO:** | FISCAL AUXILIAR | |
| **OFICINA:** | FISCALIA GENERAL | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 23/09/2018. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 23/09/2018 para la Municipalidad de San José y 11/10/2018 para el Ministerio de Seguridad Pública. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:   TIEMPO TOTAL A RECONOCER: 9 años y 29 días.  MONTO TOTAL A REINTEGRAR: ¢19,909,913.94** | **N° DE RTFJP:** | **2019122** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 8 años, 9 meses y 15 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢19,437,126.79 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Seguridad Pública |
| **N° DE RTFJP:** | **2019123** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 3 meses y 14 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢472,787.15 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Municipalidad de San José |
| **OBSERVACIONES:** | El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | La persona solicitante no manifiesta objeción con los estudios realizados. | |
| **RECOMENDACIONES:** | Aprobar los estudios de Reconocimiento de Tiempo servido en otras instituciones del Estado a partir de la fecha en que completa la gestión, es decir 23/09/2018 para el estudio N° **RTFJP: 2019123** y el 11/10/2018 el estudio N° **RTFJP: 2019122**. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva transitoriamente el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, según lo establecido en el Transitorio I de la Ley N° 9544, y en concordancia con el artículo 81 inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333) y lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, se remiten los estudios ***RTFJP nº* 2019122 (fecha de rige 11/10/2018) y *RTFJP nº* 2019123 (fecha de rige 23/09/2018)** para que ese órgano decida lo que corresponda.

Cabe indicar que, en caso de aprobarse el estudio, el tiempo total a reconocer es de **9 años y 29 días**, tiempo por el cual el servidor deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de **¢19,909,913.94.”**

- 0 -

**Antecedentes**

1. La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.
2. Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020.

En razón que la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, asimismo con vista en el informe de la Dirección de Gestión Humana ° PJ-DGH-SAS-0008-2020 del 9 de enero de 2020, **se acordó**: Reconocer para efectos de anualidades únicamente, al licenciado David Porras Meza, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General, 8 años, 9 meses y 15 días, laborados para el Ministerio de Seguridad, y 3 meses y 14 días, laborados para la Municipalidad de San José, a partir del 23 de setiembre del 2018. **2.)** Dado que este Consejo no es competente para hacer el reconocimiento para efectos jubilatorios, se traslada la gestión supra a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial para el trámite pertinente. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del gestionante.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo que corresponda.”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XL, en donde se conoció el informe N° PJ-DGH-SAS-0008-2020 del 9 de enero de 2020 emitido por la Dirección de Gestión Humana, referente al reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades tramitado por el servidor David Porras Meza, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General. **2.)** En razón de que el informe N° PJ-DGH-SAS-0008-2020 indica que el servidor Porras Meza, también gestionó solicitud para efectos jubilatorios, se aprueba el trámite de reconocimiento de tiempo servido para esos efectos, por lo que deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de ¢19,909,913.94 (diecinueve millones novecientos nueve mil novecientos trece colones con noventa y cuatro céntimos) correspondiente a: 8 años, 9 meses y 15 días, laborados para el Ministerio de Seguridad Pública y 3 meses y 14 días laborados para la Municipalidad de San José, con la advertencia de que el reconocimiento se materializará hasta la cancelación total del monto adeudado, que se le deducirá de su salario en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, números CR45015201229000003291 en el Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana.

El Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO XVI**

**Documento N° 131-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1722-2020 del 20 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XLI, que literalmente dice:

“Las máster Roxana Arrieta Meléndez y Olga Guerrero Córdoba, y la licenciada Mauren Siles Mata, por su orden, Directora interina, Subdirectora interina del Proceso de Administración Humana y Jefa interina del Subproceso Administración Salarial de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAS-0010-2020 del 9 de enero de 2020, remitieron:

**“Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | DANIEL JOSEPH GARTH BERROTERAN | |
| **N° CEDULA:** | 08-0085-0450 | |
| **PUESTO:** | JUEZ 1 | |
| **OFICINA:** | JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE PUNTARENAS | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 18/05/2018. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 18/05/2018. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | **2019118** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 4 años y 3 meses. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢20,244,512.79 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Educación - MEP |
| **OBSERVACIONES:** | El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | La persona solicitante no manifiesta objeción con el estudio realizado. | |
| **RECOMENDACIONES:** | Aprobar el estudio de Reconocimiento de Tiempo servido en otras instituciones del Estado N° **RTFJP: 2019118** a partir de la fecha en que completa la gestión, es decir 18/05/2018. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva transitoriamente el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, según lo establecido en el Transitorio I de la Ley N° 9544, y en concordancia con el artículo 81 inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333) y lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019118 (fecha de rige 18/05/2018)** para que ese órgano decida lo que corresponda.

Cabe indicar que, en caso de aprobarse el estudio, el tiempo total a reconocer es de **4 años y 3 meses**, tiempo por el cual el servidor deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de **¢20,244,512.79.”**

- 0 -

**Antecedentes**

**a)** La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.

**b)** Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020.

- 0 –

En razón que la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, asimismo con vista en el informe de la Dirección de Gestión Humana N° PJ-DGH-SAS-0010-2020 del 9 de enero de 2020, **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos de anualidades únicamente, al licenciado Daniel Joseph Garh Berroteran, Juez 1 del Juzgado Contravencional de Puntarenas, 4 años y 3 meses, laborados para el Ministerio de Educación Pública, a partir del 18 de mayo del 2018. **2.)** Dado que este Consejo no es competente para hacer el reconocimiento para efectos jubilatorios, se traslada la gestión supra a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial para el trámite pertinente. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del gestionante.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo que corresponda.”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XLI, en donde se conoció el informe N° PJ-DGH-SAS-0010-2020 del 9 de enero de 2020emitido por la Dirección de Gestión Humana, referente al reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades tramitado por el licenciado Daniel Joseph Garh Berroteran, Juez 1 del Juzgado Contravencional de Puntarenas. **2.)** En razón de que el informe N° PJ-DGH-SAS-0010-2020 indica que el licenciado Garh Berroteran, también gestionó solicitud para efectos jubilatorios, se aprueba el trámite de reconocimiento de tiempo servido para esos efectos, por lo que deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de ¢20,244,512.79 (veinte millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos doce colones con setenta y nueve céntimos), correspondiente a 4 años y 3 meses, laborados para el Ministerio de Educación Pública (MEP), con la advertencia de que el reconocimiento se materializará hasta la cancelación total del monto adeudado, que se le deducirá de su salario en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, números CR45015201229000003291 en el Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana.

El Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO XVII**

**Documento N° 132-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1723-2020 del 20 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XLII, que literalmente dice:

“Las máster Roxana Arrieta Meléndez y Olga Guerrero Córdoba, y la licenciada Mauren Siles Mata, por su orden, Directora interina, Subdirectora interina del Proceso de Administración Humana y Jefa interina del Subproceso Administración Salarial de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAS-0007-2020 del 9 de enero de 2020, remitieron:

**“Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | LEANDRO ESTEBAN GARCIA ARIAS | |
| **N° CEDULA:** | 01-1363-0875 | |
| **PUESTO:** | CUSTODIO DE DETENIDOS | |
| **OFICINA:** | UNIDAD DE CARCELES I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 07/08/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 07/08/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | **2019136** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 8 años, 3 meses y 29 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢19,008,269.15 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Seguridad Pública |
| **OBSERVACIONES:** | El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | La persona solicitante no manifiesta objeción con el estudio realizado. | |
| **RECOMENDACIONES:** | Aprobar el estudio de Reconocimiento de Tiempo servido en otras instituciones del Estado N° **RTFJP: 2019136** a partir de la fecha en que completa la gestión, es decir 07/08/2019. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva transitoriamente el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, según lo establecido en el Transitorio I de la Ley N° 9544, y en concordancia con el artículo 81 inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333) y lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019136 (fecha de rige 07/08/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda.

Cabe indicar que, en caso de aprobarse el estudio, el tiempo total a reconocer es de **8 años, 3 meses y 29 días**, tiempo por el cual el servidor deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de **¢19,008,269.15.”**

- 0 -

**Antecedentes**

**a)** La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.

**b)** Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020.

En razón que la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, asimismo con vista en el informe de la Dirección de Gestión Humana N° PJ-DGH-SAS-0007-2020 del 9 de enero de 2020, **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos de anualidades únicamente, al servidor Leandro Esteban García Arias, Custodio de Detenidos de la Unidad de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José, 8 años, 3 meses y 29 días, laborados para el Ministerio de Seguridad Pública, a partir del 7 de agosto del 2019. **2.)** Dado que este Consejo no es competente para hacer el reconocimiento para efectos jubilatorios, se traslada la gestión supra a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial para el trámite pertinente. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del gestionante.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo que corresponda.”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XLII, en donde se conoció el informe N° PJ-DGH-SAS-0007-2020 del 9 de enero de 2020 emitido por la Dirección de Gestión Humana, referente al reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades tramitado por el servidor Leandro Esteban García Arias, Custodio de Detenidos de la Unidad de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José. **2.)** En razón de que el informe N° PJ-DGH-SAS-0007-2020 indica que el servidor García Arias, también gestionó solicitud para efectos jubilatorios, se aprueba el trámite de reconocimiento de tiempo servido para esos efectos, por lo que deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de ¢19,008,269.15 (diecinueve millones ocho mil doscientos sesenta y nueve colones con quince céntimos), correspondiente a 8 años, 3 meses y 29 días, laborados para el Ministerio de Seguridad Pública, con la advertencia de que el reconocimiento se materializará hasta la cancelación total del monto adeudado, que se le deducirá de su salario en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, números CR45015201229000003291 en el Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana.

El Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO XVIII**

**Documento N° 133-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1729-2020 del 20 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XLIII, que literalmente dice:

“La máster Roxana Arrieta Meléndez y Olga Guerrero Córdoba, y la licenciada Mauren Siles Mata, por su orden, Directora interina, Subdirectora interina del Proceso de Administración Humana y Jefa interina del Subproceso Administración Salarial de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAS-0006-2020 del 9 de enero de 2020, remitieron:

“**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | MARVIN ANTONIO VARGAS ROMERO | |
| **N° CEDULA:** | 01-1157-0931 | |
| **PUESTO:** | INVESTIGADOR 1 | |
| **OFICINA:** | CENTRO JUDICIAL DE INTERVENCION DE LAS COMUNICACIONES (CJIC) | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 10/04/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 10/04/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2019121 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 7 años, 11 meses y 15 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢12,191,253.65 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Radiográfica Costarricense - RACSA |
| **OBSERVACIONES:** | El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | La persona solicitante no manifiesta objeción con el estudio realizado. | |
| **RECOMENDACIONES:** | Aprobar el estudio de Reconocimiento de Tiempo servido en otras instituciones del Estado N° **RTFJP: 2019121** a partir de la fecha en que completa la gestión, es decir 10/04/2019. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva transitoriamente el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, según lo establecido en el Transitorio I de la Ley N° 9544, y en concordancia con el artículo 81 inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333) y lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019121 (fecha de rige 10/04/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda.

Cabe indicar que, en caso de aprobarse el estudio, el tiempo total a reconocer es de **7 años, 11 meses y 15 días**, tiempo por el cual el servidor deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de **¢12,191,253.65**.”

- 0 -

**Antecedentes**

1. La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.
2. Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020.

En razón que la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, asimismo con vista en el informe de la Dirección de Gestión Humana N° PJ-DGH-SAS-0006-2020 del 9 de enero de 2020, **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos de anualidades **únicamente**, al servidor Marvin Antonio Vargas Romero, Investigador 1 del Centro Judicial de las Intervenciones de las Comunicaciones, 7 años, 11 meses y 15 días, laborados para Radiográfica Costarricense RACSA, a partir del 10 de abril de 2019. **2.)** Dado que este Consejo no es competente para hacer el reconocimiento para efectos jubilatorios, se traslada la gestión supra a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial para el trámite pertinente. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del gestionante.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo que corresponda.”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XLIII, en donde se conoció el informe N° PJ-DGH-SAS-0006-2020 del 9 de enero de 2020 emitido por la Dirección de Gestión Humana, referente al reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades tramitado por el servidor Antonio Vargas Romero, Investigador 1 del Centro Judicial de las Intervenciones de las Comunicaciones. **2.)** En razón de que el informe N° PJ-DGH-SAS-0006-2020 indica que el servidor Vargas Romero, también gestionó solicitud para efectos jubilatorios, se aprueba el trámite de reconocimiento de tiempo servido para esos efectos, por lo que deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de ¢12,191,253.65 (doce millones ciento noventa y un mil doscientos cincuenta y tres colones con sesenta y cinco céntimos), correspondiente a 7 años, 11 meses y 15 días, laborados para Radiográfica Costarricense (RACSA), con la advertencia de que el reconocimiento se materializará hasta la cancelación total del monto adeudado, que se le deducirá de su salario en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, números CR45015201229000003291 en el Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana.

El Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO XIX**

**Documento N° 134-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1730-2020 del 20 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XLIV, que literalmente dice:

“La máster Roxana Arrieta Meléndez y Olga Guerrero Córdoba, y la licenciada Mauren Siles Mata, por su orden, Directora interina, Subdirectora interina del Proceso de Administración Humana y Jefa interina del Subproceso Administración Salarial de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAS-0001-2020 del 9 de enero de 2020, remitieron:

“**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | MARCIA FRANCELA VEGA MORA | |
| **N° CEDULA:** | 01-0916-0026 | |
| **PUESTO:** | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 | |
| **OFICINA:** | SECCION ESPECIALIZADA EN TRANSITO DEL O.I.J. | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 23/08/2018. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 28/09/2018. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | **2019115** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 20 años, 4 meses y 16 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢39,052,384.33 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Inst. de Fomento y Asesoría Municipal IFAM |
| **OBSERVACIONES:** | El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | La persona solicitante no manifiesta objeción con el estudio realizado. | |
| **RECOMENDACIONES:** | Aprobar el estudio de Reconocimiento de Tiempo servido en otras instituciones del Estado N° **RTFJP: 2019115** a partir de la fecha en que completa la gestión, es decir **28/09/2018**. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva transitoriamente el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, según lo establecido en el Transitorio I de la Ley N° 9544, y en concordancia con el artículo 81 inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333) y lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019115 (fecha de rige 28/09/2018)** para que ese órgano decida lo que corresponda.

Cabe indicar que, en caso de aprobarse el estudio, el tiempo total a reconocer es de **20 años, 04 meses y 16 días**, tiempo por el cual el servidor deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de **¢39,052,384.33**”

- 0 -

**Antecedentes**

1. La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.
2. Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020.

En razón que la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, asimismo con vista en el informe de la Dirección de Gestión Humana N° PJ-DGH-SAS-0001-2020 del 9 de enero de 2020, **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos de anualidades únicamente, a la servidora Marcia Francela Vega Mora, Auxiliar de Servicios Generales 2, 20 años, 4 meses y 16 días, laborados para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, a partir del 28 de setiembre de 2018. **2.)** Dado que este Consejo no es competente para hacer el reconocimiento para efectos jubilatorios, se traslada la gestión supra a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial para el trámite pertinente. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del gestionante.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo que corresponda.”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo XLIV, en donde se conoció el informe N° PJ-DGH-SAS-0001-2020 del 9 de enero de 2020 emitido por la Dirección de Gestión Humana, referente al reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades tramitado por la servidora Francela Vega Mora, Auxiliar de Servicios Generales 2. **2.)** En razón de que el informe N° PJ-DGH-SAS-0001-2020 indica que la servidora Vega Mora, también gestionó solicitud para efectos jubilatorios, se aprueba el trámite de reconocimiento de tiempo servido para esos efectos, por lo que deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de ¢39,052,384.33 (treinta y nueve millones cincuenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro colones con treinta y tres céntimos), correspondiente a 20 años, 4 meses y 16 días, laborados para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), con la advertencia de que el reconocimiento se materializará hasta la cancelación total del monto adeudado, que se le deducirá de su salario en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, números CR45015201229000003291 en el Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana.

El Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO XX**

**Documento N° 135-2020**

Se recibe al Máster Raúl Hernández González, Actuario Matemático, con la finalidad de que esta Junta Administradora conozca el estado del estudio de valuación actuarial, además, conocer los supuestos que se están utilizando para la realización del mismo.

Al respecto, la integrante Moya Aguilar manifiesta que según correo electrónico del 28 de febrero de 2020, el MBA. José Andrés Lizano Vargas, Jefe del Proceso de Riesgos, comunicó que por razones personales el actuario, máster Raúl Hernández no podrá asistir a dicha sesión pero que por el interés en el tema propone reunirse con el equipo contraparte del estudio actuarial ese mismo día en horas de la tarde o miércoles o jueves de esta misma semana.

**Se acordó:** Se toma nota de la comunicación de la integrante Moya Aguilar y de la imposibilidad de don Raúl de presentarse a la sesión con la Junta Administradora y se acuerda que sea el equipo contraparte del estudio actuarial quien atienda al Máster Hernández González el 4 de marzo 2020.

**ARTÍCULO XXI**

**Documento N° 136-2020.**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 2207-2019 del 4 de marzo de 2019, comunicó el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión número 19-2019 celebrada el 1 de marzo del 2019, artículo XIX, que literalmente dice:

“El máster Rodrigo Campos Hidalgo, Director Jurídico interino, en oficio N° DJ-528-19 de 20 de febrero de 2019, remitió lo siguiente:

**“**En atención al oficio N°1444-19, suscrito por el Lic. Eduardo Chacón Monge, Prosecretario General interino, en el cual se comunica a esta Dirección el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 10-19, celebrada el siete de febrero del año en curso, artículo XX, referente a la valoración de las opciones de cobro por los intereses dejados de percibir por parte del Ministerio de Hacienda, hago de su estimable conocimiento lo siguiente:

En sesión de Consejo Superior No. 84-18, celebrada el veinticinco de setiembre del dos mil dieciocho, artículo XV, se conoció el oficio No. PGA-092-2018 del siete de setiembre del año anterior, suscrito por la Dra. Magna Inés Rojas Chaves, Procuradora General de la República, que en lo que nos interesa señala:

*“Me refiero a su oficio N°8068-18 de fecha 8 de agosto del año en curso, recibido en esta Procuraduría el 13 de agosto, en el que se solicita la designación de un Procurador ad hoc para representar al Poder Judicial en un eventual litigio en relación con la devolución de retenciones de Impuesto sobre la Renta, pago de premios e intereses moratorios por inversión en títulos valores de dineros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que se reclaman al Ministerio de Hacienda.*

*En primer término, es importante señalar que, según la reforma que sufrió el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial mediante Ley N° 9544, corresponde a la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, en su carácter de órgano con independencia funcional, técnica y administrativa, administrar esos recursos, para lo cual se le dota de personalidad jurídica instrumental. Así como le compete la representación judicial y extrajudicial del Fondo, artículo 239 de la Ley.*

*Partiendo de tal atribución normativa, es la Junta Administrativa en ejercicio de esa representación el órgano que podría ejercer, por los medios que estime convenientes, las acciones que resulten necesarias para la devolución de retenciones del Impuesto sobre la renta mencionadas.*

*La Procuraduría no podría en forma alguna ejercer la representación de los intereses del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, ya que lo solicitado escapa de la esfera de competencia legalmente otorgada por haber sido asignada a la Junta Administrativa.*

*En otro orden de ideas, es importante señalar que como ya se había indicado en oficio ADPb-1044-2015 del 30 de enero de 2015, la Procuraduría no podría asumir la legitimación activa y pasiva dentro de un mismo proceso, en tanto debería participar como actor interponiendo la acción en defensa de los intereses del Fondo y simultáneamente contestar la demanda en representación del Ministerio de Hacienda.*

*(…)”.*

Por lo anterior, debido a que el Ministerio de Hacienda continua rechazando los reclamos de este Poder de la República y según lo indicado por la señora Procuradora, no es posible acudir a la vía jurisdiccional sin la representación legal correspondiente; por tales motivos se recomienda que las acciones se interpongan una vez conformada la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial que contaría con las posibilidades de contratar el patrocinio legal privado para atender esos asuntos.

De esta manera, dejamos atendida su solicitud.”

- 0 -

En la sesión N° 84-18 celebrada el 25 de septiembre del 2018, artículo XV, se tomó nota de la comunicación realizada por la doctora Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta, en oficio N° PGA-092-2018 del 17 de setiembre del 2018 y se trasladó el presente acuerdo a la Presidencia de la Corte,  con el fin que valore la posibilidad de reunirse con el señor Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada y le exponga la situación de las retenciones de Impuesto sobre la Renta, pago de premios e intereses moratorios por inversión en títulos valores de dineros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que se reclaman al Ministerio de Hacienda, y con ello hacer una instancia para una devolución de esos dineros a las arcas del Fondo.

La Corte Plena, en sesión extraordinaria N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, tuvo por rendido el informe del máster Rodrigo Campos Hidalgo, Director Jurídico y en lo conducente, dispuso que el Consejo Superior del Poder Judicial tendría la competencia y responsabilidad de implementar los alcances de la Ley 9544 en su integralidad, en tanto no se traslade la competencia a la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Al mantenerse las competencias del Consejo Superior, no se está en presencia aún de un órgano con máxima desconcentración, por lo que se mantienen las relaciones inter orgánicas del mismo con la Corte Suprema de Justicia y demás instancias de rango inferior.

Asimismo, en la sesión N°10-19 celebrada el 7 de febrero del 2019, artículo XX , de conformidad con el acuerdo adoptado por la Corte Plena en sesión N°53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, por mayoría se tuvo por rendido el informe N°313-DE-2019 de 24 de enero de 2019, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, en el que remitió el oficio N°27-FC-2019 de fecha 18 de enero de 2019, de la máster Floribel Campos Solano, Jefa del Departamento Financiero Contable, sobre la respuesta negativa del Ministerio de Hacienda para la cancelación efectiva de los aportes obreros, patronales y estatales al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ). Por lo anterior, debería la Dirección Jurídica en coordinación con el Departamento Financiero Contable, valorar las opciones de cobro por los medios legales oportunos, de los intereses dejados de percibir a lo largo de los periodos 2017 y 2018.

En ese momento en lo conducente, el integrante Carlos Montero Zúñiga salvó el voto, debido a que considera que el Consejo Superior perdió la competencia para administrar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Corte Plena en sesión N°53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI, por mayoría, **se acordó:** Tener por rendido el oficio N° DJ-528-19 de 20 de febrero de 2019suscrito por el máster Rodrigo Campos Hidalgo, Director Jurídico interino y estar a la espera de la conformación de la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

El integrante Carlos Montero Zúñiga salva el voto, debido a que considera que el Consejo Superior perdió la competencia para administrar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Ya que las atribuciones que otorgó el transitorio 1 de la ley N° 9544 del 24 de abril de 2018, era mientras se cumplía el plazo máximo de seis meses a partir de su publicación, el cual venció el pasado 21 de noviembre de 2018. Y que la norma no previó una extensión del plazo. Asimismo, que el acuerdo de Corte Plena es una decisión de tipo administrativo y que ese Órgano no tiene competencia para darle una interpretación auténtica a la ley.

Las Direcciones Jurídica y Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable, tomarán nota para lo que corresponda. **Se declara acuerdo firme.”**

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tomar nota de lo comunicado por laSecretaría General de la Corte en oficio número 2207-2019 del 4 de marzo de 2019, mediante el cual comunicó el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión número 19-2019 celebrada el 1 de marzo del 2019, artículo XIX. **2.)** Solicitar al Departamento Financiero Contable remita un informe de los montos exactos de las retenciones de Impuesto sobre la renta, pago de premios e intereses moratorios por inversión en títulos valores de dineros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que se deben reclamar al Ministerio de Hacienda. **3.)** Asignar el presente caso para estudio de la asesoría legal contratada por esta Junta Administradora, con la finalidad de que recomiende lo que corresponda en el eventual litigio para recuperar las sumas retenidas por el Ministerio de Hacienda.

**ARTÍCULO XXII**

**Documento N° 141-2020**

**Antecedente:**

En sesión de Consejo Superior N° 107-19 celebrada el 10 de diciembre de 2020, artículo VI, conocieron el oficio N° 5595-DE-2019 del 2 de diciembre de 2019, emitido por la Dirección Ejecutiva, en lo que interesa, esa Dirección recomendó a esta Junta Administradora valorar la conveniencia, atendiendo el principio “Pro Fondo” de realizar un estudio socioeconómico a fin de determinar si las beneficiarias de pensión señaladas en el numeral 8 de ese informe, entre esas personas la beneficiaria Marcela Muñoz Benavides, requieren o no de la pensión para subsistir.

- 0 -

Con base en lo anterior, el licenciado Thelmo Flores León, Trabajador del Departamento de Trabajo Social y Psicología, remitió el dictamen 20-247-160-TS del 27 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“(…)

**I) Datos generales:** Referida: Marcela Muñoz Benavides. Fecha entrega Dictamen: 27 de febrero de 2020

**II) Motivo de intervención:** Realizar Estudio Social de la Referida.

**III) Consentimiento informado:** Se le informa a la persona a valorar acerca del objetivo, la metodología y el carácter voluntario de la presente valoración social; enterada, manifiesta estar de acuerdo en participar.

**IV) METODOLOGÍA EMPLEADA Y FUENTES DE INFORMACIÓN:**

* **Revisión Documental:**

- Referencia del Poder Judicial y documentos adjuntos.

-Consulta a la Unidad de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

- Consulta Registro de la Propiedad vía Internet sobre bienes inmueble y muebles de la Referida (26-2-20).

- Consulta Sistema Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) sobre la Referida (27-2-20).

- Consulta Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre la señora Muñoz (19-2-20).

- Consulta Registro de la Propiedad de la Referida (26-2-20).

-Estados de cuenta del Banco de Costa Rica de la señora Muñoz de los meses de Setiembre y noviembre del 2019 y enero de 2020.

-Epicrisis y receta médica de la señora Muñoz.

- Constancias de ingresos y sus deducciones de la señora Muñoz (Poder Judicial) de diciembre de 2019 y enero 2020.

- Revisión de correo electrónico de la señora Ivannia Muñoz Benavides, hermana de doña Marcela.

- Entrevista focalizada a la señora Marcela Muñoz.

* **Trabajo de Campo**:

- Valoración social domiciliaria a la persona Referida.

- Observación no Participante.

**V) ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DE LA SITUACIÓN VALORADA**

La persona referida es la señora Marcela Muñoz Benavides, cédula 1 0428 078, quien nació en Costa Rica el 6-3-1954, por lo que suma 65 años.

Hija del señor Jorge Muñoz Fonseca y de la señora Cristina Benavides Chaverri, quienes estuvieron casados y fruto de la relación procrearon tres mujeres y un hombre (Iliana, Ivannia, la Referida y Jorge, todos Muñoz Benavides).

Refiere que su padre se desempeñó en el Poder Judicial como Juez de la República; mientras que su madre, se desempeñó como ama de casa. Señala que el primero, falleció en el año 2009, pero se había jubilado años atrás; a su vez, indica que su madre falleció antes que su padre.

Residió con sus progenitores, en un contexto en el que, indica es soltera y no procreó hijos /as. Cuenta con el Bachillerato y con estudios Técnicos en Secretariado Bilingüe (no concluyó la formación). Se desempeñó en dos empleos, uno de estos, lo realizó en una empresa de su hermano (según consulta a la CCSS cuenta con 307 cuotas, no aporta cuotas desde hace varios años. A su vez, no tiene pensión de la CCSS).

Recuerda que alrededor del años 2000, mientras se encontraba laboralmente activa, su padre sufrió de una fractura de fémur. Para ese momento, era viudo, marco en el que ella y su padre vivían solos.

A raíz de lo anterior, afirma que dejó de laborar fuera del hogar, para asumir el cuidado de su padre; quien, además, sufría de otras enfermedades, tales como diabetes. Posteriormente éste falleció.

Explica que su progenitor, la designó como beneficiaria de su pensión; así como también les donó a ella y a su hermana Ivannia, la vivienda en la que residieron. Presenta documento copia del registro que dice literalmente que ella es dueña de un 80 % de la finca número SJ - 0028092 1958 (se verificó en el Registro que es dueña de un porcentaje de la finca).

Manifiesta que después del fallecimiento de su papá, no volvió a laborar, debido a que sufre de diabetes mellitus, tricotilomanía que es un problema nervioso y otros padecimientos. Según epicrisis se hace alusión a la Diabetes y a otras condiciones.

Explica que goza de Seguro Social, pero no usa la insulina que brinda la CCSS para la diabetes, debido a que le afecta. Sin embargo, en la CCSS se realiza sus exámenes de laboratorio y asiste a otros servicios. De esta forma, básicamente compra la insulina y vitaminas en el ámbito privado y asegura que existen otros medicamentos que requiere, pero no puede adquirirlos, ya que sus ingresos, no se lo permiten.

Afirma que su único ingreso es el que recibe por concepto de la pensión del poder Judicial (su hermana consultada, lo avala. A su vez en SINIRUBE, no aparece registrada). En las constancias que muestra y aporta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, para Diciembre de 2019, el monto bruto de la pensión que recibe es de 908 129 84 mil colones, pero el monto neto es de 642 034 84 mil colones; para el mes de enero del año 2020, el ingreso bruto es de 908 129 84 mil colones y el neto es de 648 200 84 mil colones. En la constancia se detallan deducciones por Seguro, amortización de préstamo en Coopejudicial (promedio de ambos meses es de 64 195 mil colones), ahorro Coopejudicial (24000 mil colones), impuesto de renta, fondo pensiones PJ y Aporte Junta Administrativa del FPJ.

Agrega que su hermano falleció, otra de sus hermanas reside en los Estados Unidos, por lo que solo su hermana Ivannia, vive en el País. Indica que ésta labora como Abogada y cuenta con su familia, contexto en el que no recibe apoyo económico de sus hermanas; ni de otras instancias (información que su hermana también avaló).

Frente a este ingreso, refiere que algunos de sus egresos mensuales promedio son de:

Alimentación 250 mil colones

Farmacia 50 mil colones

Agua 17 mil colones

Energía eléctrica 20 mil colones

Telefonía 28 mil colones

Cable 27 mil colones

Impuestos Municipales 28 mil colones

Gastos personales 25 mil colones

Recreación 50 mil colones

Mantenimiento casa 80 mil colones

Transporte Uber 40 mil colones

Pago empleada doméstica 32 mil colones

Total 648 mil colones

Dicho monto es aproximado, ya que no se verificaron con documentos los diferentes gastos; sin embargo, en los estados de cuenta presentados por la señora Muñoz, se observa que en el mes de setiembre gasto 609 703 mil colones, en el mes de noviembre 571 636 (ambos meses de 2019) y en el de enero gastó 819 501 colones. En esos estados se detallan diferentes bienes, servicios y artículos adquiridos.

A su vez, asegura que debe más de 200 mil colones de una tarjeta del Banco Nacional, pagando alrededor de 20 mil colones mensuales. Por lo que al observar los datos, se observa que es posible que en ocasiones, gaste más dinero del que aseguró recibir, explicando que como estrategias, elimina los gastos prescindibles y además ha recurrido a utilizar dinero de un ahorro que tiene en Coopejudicial o ha realizado préstamos en esa Institución.

En la valoración social domiciliaria se encontró con una casa amplia, construida con cemento, la cual consta de tres dormitorios, dos baños y medio, sala comedor y zona verde. El inmueble luce en buen estado.

**VI) CONCLUSIONES:**

A partir de la investigación realizada se pone de manifiesto que doña Marcela hace frente a sus gastos a partir del dinero que percibe de la Pensión del Poder Judicial, único ingreso que se logró detectar.

Dentro de sus gastos, están los relacionados con la satisfacción de sus necesidades básicas, el mantenimiento de la casa que habita, entre otros; así como otros vinculados con egresos de índole más superfluo, relacionados por ejemplo, con su recreación.

La casa que habita se encuentra en buen estado; es dueña de una parte del inmueble.

(…)”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por presentado el dictamen N° 20-247-160-TS del 27 de febrero de 2020 suscrito por el licenciado Thelmo Flores León, Trabajador del Departamento de Trabajo Social y Psicología, en el que remite estudio social de la pensionada Marcela Muñoz Benavides. **2.)** Previamente a resolver lo que corresponda, trasladar la presente gestión a la asesoría legal contratada por esta Junta Administradora para estudio e informe, con el fin de que indique los alcances que tiene este órgano en cuanto a suspender una pensión otorgada previo a la reforma N° 9544 al título IX del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

El Departamento de Trabajo Social y Psicología tomará nota para lo que corresponda.

**ARTÍCULO XXIII**

**Documento N° 127-2020**

Mediante correo electrónico del 20 de febrero de 2020, el MPM. Oslean Mora Valdez, jefe del Proceso de Inversiones, informó que remitió al servidor Melvin Obando Villalobos, MGPP. Jefe interino del Subproceso de Análisis y Ejecución de la Dirección Ejecutiva, el detalle de información referente al Órgano de Dirección del FJPPJ, el cual requiere ser registrada ante el sistema de SUPEN Directo. Así mismo, señaló que se remitió la información de los Comités de Inversiones, Riesgos y Auditoría respectivos para concluir el trámite necesario, con la finalidad de entregar la información y cumplir con la normativa.

- 0 -

**Se acordó:** Tomar nota de la comunicación realizada por el MPM. Oslean Mora Valdez, jefe del Proceso de Inversiones del Departamento Financiero Contable

**ARTÍCULO XXIV**

**Documento N° 137-2020**

La señora Gabriela Jarquín Valladares, servidora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección de Gestión Humana, mediante correo electrónico del 25 de febrero de 2020, remitió “Hoja de Criterio” de la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez, referente a la sesión N° 025-2020 del 17 de enero de 2020, en donde declaran a la servidora Francella López Madrigal como persona inválida.



- 0 -

La licenciada Olga Guerrero Córdoba y el licenciado Carlos Lizano Alfaro, por su orden, subdirectora a.í y jefe a.í de Administración de Personal, ambos de la Dirección de Gestión Humana, remitieron el oficio N° 025CJ-2020 del 24 de febrero de 2020, que literalmente indica:

**“INFORME DE ASIGNACIÓN DE BENEFICIO DE JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE**

En acatamiento a lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión N° 96-19 celebrada el 05 de noviembre del 2019, ARTÍCULO LXXVI, en la cual se acordó: **"Solicitar a la Dirección de Gestión Humana que, cuando ingresen informes de la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde declaren “Invalido” a un servidor judicial, realicen los cálculos de jubilación de forma inmediata y los remitan a este Consejo Superior en conjunto con el dictamen, para aprobar la jubilación y los cálculos en el mismo acto"**. Por tanto procedemos a presentar el informe donde se separa por Incapacidad Absoluta y Permanente a FRANCELLA DE LOS ANGELES LOPEZ MADRIGAL, cédula Nº 01-1192-0661, a partir del 16 de febrero del 2020.

Al 15 de febrero del 2020, la señora FRANCELLA DE LOS ANG LOPEZ MADRIGAL habrá laborado para este Poder por espacio de 15 años, 6 meses, 11 días.

**TOTAL TIEMPO SERVIDO:** 15 años, 6 mes(es), 11 día (s).

**TOTAL TIEMPO RECONOCIDO:** 0 años, 0 mes(es), 0 día (s).

**TOTAL GENERAL:** 15 años, 6 mes(es), 11 día (s).

**EDAD:** 36 años, 1 mes(es), 22 día (s).

**FECHA DE NACIMIENTO:** 24/12/1983

**ÚLTIMO CARGO EN PROPIEDAD:** TÉCNICO JUDICIAL 1, JUZGADO PRIMERO CIVIL MENOR CUANTÍA SAN JOSÉ

**NÚMERO DE PUESTO EN PROPIEDAD:** 44082

**ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO:** TÉCNICO JUDICIAL 1, JUZGADO TERCERO ESPECIALIZADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE

**PUESTO(S) DE REAJUSTE:** TÉCNICO JUDICIAL 1, 100.00 %

**Datos de referencia:**

**ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:** ¢ 469,455.45

**TERCERA PARTE DEL SALARIO BASE DEL PUESTO MAS BAJO PAGADO EN EL PODER JUDICAL: ¢141,933.33 (Monto mínimo establecido en el artículo 225 Ley Orgánica del Poder Judicial 9544)**

**SALARIO PROMEDIO:** ¢ 695,050.96 (de los últimos doscientos salarios)

**NORMA LEGAL:**

"Cálculos realizados según lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 9544."

**FÓRMULA APLICADA:**

15 años, 6 meses, 11 días (200 salarios mensuales) + % salario escolar (fechas que corresponda) \* variaciones en el Índice de Precios al Consumidor en cada uno de los meses / 200 = Salario Promedio

Salario Promedio \* 83% = Salario de referencia

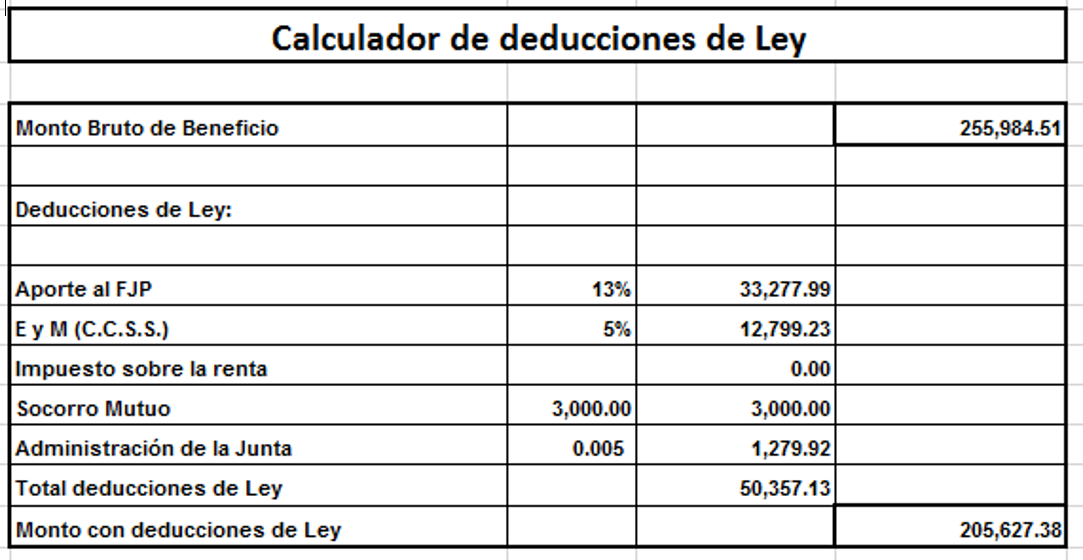
Total del tiempo servido / 35 años que estipula la ley actual = Porcentaje de beneficio

Salario de referencia \* Porcentaje de beneficio = Monto de jubilación

**MONTO DE JUBILACIÓN:** ¢255,984.51

**PORCENTAJE DE JUBILACIÓN:** 44,37%

**MONTO DE JUBILACIÓN CON DEDUCIONES: ¢205,657.38**

****

**Información adicional:**

El pago por auxilio de cesantía y vacaciones se estará remitiendo al Departamento de Financiero Contable para su debido diligenciamiento.

Se adjunta certificación aportada por el Departamento de Financiero Contable, donde se indica si la persona servidora presenta o no, alguna deuda ante dicho Departamento.

Se adjunta certificación aportada por el Subproceso de Gestión de la Capacitación, donde se indica si la persona servidora mantiene compromisos vigentes por concepto de becas.

Se adjunta certificación en estricto apego a lo normado en el artículo 586 del Código de Trabajo.

Se anexa hoja de criterio de Comisión Calificadora del Estado de Invalidez

**Notificaciones:**

(…)

**Correcciones disciplinarias:**

**Consideraciones relevantes:**

La señora López Madrigal no registra correcciones disciplinarias durante la vigencia de su relación laboral con el Poder Judicial y de acuerdo con la información aportada por la Inspección Judicial, no registra causas disciplinarias en trámite.

separada por incapacidad absoluta y permanente.

Conforme al índice de salarios vigente, el salario más bajo cancelado corresponde a la clase “Auxiliar de Servicios Generales 1”, que registra un monto de ¢425,800.00, con lo cual, según lo establecido por la ley 9544, el tope mínimo para efectos de jubilación correspondería a la tercera parte del salario indicado, estableciendo el monto en ¢141,933.33.

Para efectos del cálculo del monto de jubilación la ley 9455 establece en su artículo 227: “a) Se determina el ochenta y tres por ciento (83%) del promedio de los salarios ordinarios devengados en los últimos veinte años de su vida laboral o los que hubiera disponibles…”

Para el presente caso, la señora Francella López Madrigal, no acumula el requisito de los 20 años de salario, quedando el cálculo reservado a 200 salarios que registra disponibles, esto entre junio del 2003 y febrero del 2020.

La señora Francella López Madrigal saca permisos sin goce de salario, los días en los que no la incapacitan, al ser incierto si iba a sacar más permisos sin goce de salario en los próximos días, se decide separarla a partir del 16/02/2020, fecha en la que ya se tiene la información correcta para calcular el tiempo servido y los salarios que le corresponden para su jubilación.”

- 0 -

Mediante constancia N° 29-PI-2020 emitida por el Departamento Financiero Contable, se constata que la servidora Francella López Madrigal, no tiene deudas pendientes con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

**Se acordó: 1.)** Aprobar la jubilación por incapacidad absoluta y permanente de la servidora Francella López Madrigal, técnica judicial del Juzgado Tercero Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, cuya asignación mensual bruta será de ¢255,984.51 (doscientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro colones con cincuenta y un céntimos), menos las deducciones que por ley correspondan, a partir del 16 de febrero de 2020. **2.)**Se le previene a la señora López Madrigal que en razón de haber sido acordada su jubilación por invalidez, se le suspenderá el goce del beneficio cuando se tenga noticia que está desempeñando otro empleo y mientas se mantenga su situación actual de salud. **3.)**Asimismo, se previene a la señora Francella, que debe señalar un medio personal para recibir notificaciones ante el Departamento Financiero Contable, con la advertencia que de no hacerlo, las resoluciones posteriores le quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales. **4.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del Consejo Superior.

La Dirección de Gestión Humana y el Departamento Financiero Contable, tomarán nota para los fines consiguientes.

**ARTÍCULO XXV**

**Documento N° 138-2020.**

**Antecedentes:**

En sesión número 3-2020 celebrada el 10 de febrero de 2020, artículo III, esta Junta Administradora, tomó el acuerdo que literalmente dice:

“Con la finalidad de establecer sanas prácticas en las actividades realizadas por esta Junta Administradora de conformidad con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, **se acuerda**: Conformar la Comisión de Gobierno Corporativo, con los siguientes integrantes:

Máster Rodrigo Arroyo Guzmán.

Licenciado Freddy Chacón Arrieta.

Licenciado Parris Quesada Madrigal.

Comunicar el presente acuerdo a los integrantes designados, con la finalidad de que informen su deseo de participar en la citada comisión.”

- 0 -

Asimismo, en sesión número 4-2020 celebrada el 17 de febrero del 2020, artículo XXVII, se le comunicó al licenciado Parris Quesada Madrigal, que puede participar en el Comité de Auditoría o en su defecto en cualquiera de las comisiones que se lleguen a establecer por parte de esta Junta, por lo que deberá informar su aceptación para comunicar lo que corresponda a la Superintendencia de Pensiones.

Con base en lo anterior, por medio de correo electrónico del 26 de febrero de 2020, el licenciado Freddy Chacón Arrieta manifestó su anuencia en participar en la Comisión de Gobierno Corporativo. Además, por medio de correo electrónico de esa misma fecha, el licenciado Parris Quesada Madrigal, manifiesta su anuencia de participar en la Comisión de Gobierno Corporativo y en el Comité de Auditoría.

Informa la licenciada Lucrecia Ruiz Rojas, Secretaria de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones que el integrante suplente Rodrigo Arroyo Guzmán acepta conformar la Comisión de Gobierno Corporativo.

En conceso se designa a la licenciada Ruiz Rojas, como integrante de la Comisión de Gobierno Corporativo.

**Se acordó: 1.)** Tener por recibidas las aceptaciones de los integrantes Freddy Chacón Arrieta, Parris Quesada Madrigal, Rodrigo Arroyo Guzmán y Lucrecia Ruiz Rojas. **2.)** Esta Comisión de Gobierno Corporativo y otras que conforme esta Junta Administradora, serán por plazo determinado y hasta tanto cumplan con el fin para el cual fueron creadas. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Secretaría de esta Junta Administradora para los fines correspondientes.

La Comisión de Gobierno Corporativo y el Comité de Auditoría tomarán nota para los fines correspondientes.

**ARTÍCULO XXVI**

**Documento N° 123-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1601-2020 del 18 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 05-2020 celebrada el 21 de enero del 2020, artículo XIII, que literalmente dice:

“(…)

La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, en oficio N° 100-DE-2020 del 9 de enero de 2020, remitió oficio N° 008-PI-2020 suscrito por la máster Floribel Campos Solano, Jefa del Departamento Financiero Contable y Acta N° 079-CI-2019 del Comité de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, de sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019.

Seguidamente se transcribe el oficio de referencia:

“Conforme las políticas de transparencia, así como lo analizado y aprobado por el Comité de Inversiones en la sesión ordinaria del **18 de diciembre de 2019**, se adjuntan los siguientes documentos:

1. “*Informe de Inversiones de las carteras del Poder Judicial y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial al cierre de noviembre 2019.*
2. *“Estrategia de Inversiones para el I trimestre del 2020.*
3. *“Acta 079-CI-2019 sesión ordinaria del Comité de Inversiones del Fondo de*

*Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”.*

La información detallada y anexada en este documento es, si a bien lo estima, para hacerlo de conocimiento del Consejo Superior.”



- 0 -

La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, realiza un resumen de la gestión, asimismo manifiesta: “Ayer tuvimos la reunión y creo que fue la última con la actual integración de los Comités de Riesgos e Inversiones, por lo que se está haciendo un informe final de cierre y se quería aprovechar para pedirle o sugerirle a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en este caso al Integrante Montero Zúñiga, que la representa, un espacio por parte de los Comités para hacer una exposición sobre el estado de la cartera, del tema de riesgos, que se considera muy importante, sé que dicha Junta está con un montón de temas a la vez, pero si quería hacer la sugerencia

Indica el Integrante Montero Zúñiga: “Es muy necesario eso y sobre todo si Dios lo permite el próximo lunes después de la juramentación, se estaría conformando formalmente la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, con sus nombramientos, ayer estuvimos hablando el tema de los Comités que la Junta tiene que designar los de Riesgos, Inversiones, Auditoría, entre otros, por lo que sería importante tener esa información. Esto nos había quedado, desde que estuvimos trabajando en el traspaso, de darle una especie de acompañamiento o asesoría a la Junta por parte de las diferentes oficinas, con las labores que hace el Departamento Financiero Contable, la Dirección de Gestión Humana, Inversiones y Riegos y otras; a los compañeros nuevos de la Junta, porque tal vez tengo cierta ventaja porque estuve en los Comités, estoy en el Consejo Superior y entiendo un poco más del tema, pero si sería bueno incluso programar con el personal del Departamento Financiero Contable, Inversiones y Riegos, reuniones con la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

La próxima semana sesionamos el lunes después de la juramentación de Corte Plena y se podría sesionar otra vez para recibir a los Comités, voy a conversarlo con los compañeros, es de los temas prioritarios que hay que hacer”.

Responde la máster Romero Jenkins: “De acuerdo, nos indican por que los Asesores Externos mostraron mucho interés en participar y presentarse de manera formal ante la Junta, porque si todo sale conforme al proyecto de convenio que se ha trabajado, ellos continuarían porque hay contratos vigentes de la institución con ellos”.

Expresa la Vicepresidenta, magistrada Solano: “Si no hay objeciones, aprobamos en los términos señalados y por supuesto que una nueva experiencia en la institución, ya con la operatividad de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, dado que estuve en el proceso de selección, me alegro que entre las personas que quedan se encuentre el Integrante Montero Zúñiga, que es una persona con larga experiencia y que mejor conocen nuestro fondo de pensiones, de manera que no tengo duda que queda en buenas manos y que seguirán haciendo lo mejor en pro de la población judicial”.

Interviene el licenciado Carlos Mora Rodríguez, Subsecretario General interino: “Me indicó el máster Róger Mata Brenes, Director del Despacho de la Presidencia, que les recordará que ya les pasó el proyecto de convenio para que lo analicen con tiempo, ya que se va a conocer en la sesión del jueves. Asimismo, en virtud que el Integrante Montero Zúñiga solicitó separarse, está citada la máster Dinorah Álvarez Acosta para que integre el órgano”.

Tomando en consideración la competencia que aún conserva transitoriamente este Consejo para conocer de los asuntos relacionados con la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, según lo establecido en el Transitorio I de la Ley N° 9544, y en concordancia con el artículo 81 inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333) y lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 53-18 celebrada el 19 de noviembre de 2018, artículo XXI; **se acordó por mayoría: 1)** Tener por recibido el oficio N° 100-DE-2020, de la Dirección Ejecutiva,referente al “oficio N° 008-PI-2020 suscrito por la máster Floribel Campos Solano, Jefa del Departamento Financiero Contable donde se adjuntan el “Informe de Inversiones de las carteras del Poder Judicial y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial al cierre de noviembre 2019, la Estrategia de Inversiones para el I trimestre del 2020 y el Acta N° 079-CI-2019 del Comité de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, de sesión celebrada el día 18 de diciembre último.” **2)** Tomar nota de los acuerdos tomados por parte del Comité de Inversiones del Fondo de Jubilaciones Pensiones del Poder Judicial en la Sesión celebrada el día 18 de diciembre último, de las estrategias de colocación que se definieron, así como que el comportamiento de la cartera de inversiones del FJPPJ, mantiene niveles acordes con la reglamentación vigente y con la Estrategia de Inversión definida, así como demás parámetros de control establecidos para la misma. **3)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección Ejecutiva, del Comité de Inversiones, del Departamento Financiero Contable, así como del equipo de trabajo del proyecto de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

La integrante Sandra Pizarro Gutiérrez vota por no conocer el asunto, en tanto estima que a la fecha, el Consejo Superior no es competente para conocer asuntos referentes a la administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por cuanto no existe respaldo jurídico que permita interpretar que este Órgano mantiene dichas competencias. Si bien es cierto el Consejo Superior, era el órgano máximo de dirección del citado Fondo, se estima que actualmente la Junta Administradora indicada en la Ley N°. 9544, está formalmente integrada, lo que evidentemente limita las facultades de este Órgano Colegiado para pronunciarse sobre temas relacionados con la Administración del Fondo de conformidad con el Transitorio I de la Ley 9544:“…**En tanto se integre la Junta Administradora,** el Consejo Superior del Poder Judicial continuará ejerciendo las atribuciones a que se refieren los incisos 12, 13, 14 y 15 del artículo 81 de la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas. (El subrayado no pertenece al original). Además, el acuerdo de Corte Plena, donde se le brinda la potestad de hacerlo a este Órgano, es una decisión de tipo administrativo de un órgano que no tiene competencia para realizar una interpretación auténtica de la ley indicada.**”**

- 0 -

**Se acordó:** Tomar nota del acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 05-2000 celebrada el 21 de enero del 2020, artículo XIII.

**ARTÍCULO XXVII**

**Documento N° 122-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1665-2020 del 19 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo II, que literalmente dice:

“(…)

En sesión de Corte Plena 4-20 celebrada el 27 de enero de 2020, articulo VII, se acordó a revocar parcialmente el acuerdo tomado en sesión 45-19 artículo VI de ese órgano, en cuanto a que la junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, entraría en funciones el 3 de febrero de 2020 y en su lugar las funciones iniciarían a partir de ese día de la sesión.

Luego en esa misma sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero del año en curso, la Corte Plena, acordó literalmente lo siguiente:

“**ARTÍCULO X**

**Documento 979, 980-2020.**

Expresa el Presidente, Magistrado Cruz: “Quiero consultarles si están de acuerdo en declarar firme el acuerdo de la mañana para que inicie hoy la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, para que ya declaren la firmeza de ese acuerdo, ¿Están de acuerdo? Así lo declaramos.

Fuera de agenda hay una comunicación de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el primer acuerdo de ellos".

La Secretaria General procederá a dar lectura a los oficios remitidos por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.”

Expresa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte: "Esto lo recibí a las 12:55 horas de hoy y es la sesión N° 1-20 de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, son dos artículos que dicen:

“**Nº 1-20**

**JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. -** San José, a las diez horas treinta y un minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte.

Sesión ordinaria con asistencia de los másteres Carlos Montero Zúñiga, Miguel Ovares Chavarría y Mauricio Villalta Fallas, de las licenciadas Ingrid Moya Aguilar y Ana Lucrecia Ruiz Rojas y del licenciado Arnoldo Hernández Solano.

**ARTÍCULO I**

**Documento N°**

Debido a que la Corte Plena en el presente día juramentó a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se procede con la elección de la persona integrante que será designada como presidente, por lo anterior, el licenciado Arnoldo Hernández Solano, quien ostenta la mayoría de edad entre los otros integrantes, procede a abrir votación pública para el nombramiento.

El integrante Mauricio Villalta Fallas, propone al integrante Montero Zuñiga para el cargo de presidente de la Junta Administradora.

El Integrante Miguel Ovares Chavarría, Arnoldo Hernández Solano, Lucrecia Ruiz Rojas e Ingrid Moya Aguilar, apoyan la propuesta planteada por el integrante Villalta Fallas.

El integrante Montero Zúñiga agradece y acepta el cargo de presidente de la Junta Administradora del Fondo.

- 0 -

En razón de lo manifestado, **se acuerda lo siguiente**: Se tiene por designado al máster Carlos Alberto Montero Zúñiga como presidente de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por el periodo del 27 de enero de 2020 hasta el 26 de enero de 2021. Las calidades del Señor Montero Zúñiga son: cédula de identidad 0106710876, mayor casado uno vez, economista, vecino de Monter de Oca.

Hacer este acuerdo de conocimiento de la Superintendencia de Pensiones, de la Corte Plena, del Consejo Superior y de las Asociaciones Gremiales del Poder Judicial. **Se declara acuerdo firme**.

**ARTÍCULO II**

**Documento N°**

El integrante Montero Zúñiga procede con la elección de las personas integrantes que ocuparán los otros puestos del directorio de la Junta Administradora, por lo anterior, se inicia la votación respectiva, en el siguiente orden:

Para el cargo de Vicepresidencia representando a los integrantes elegidos por el colectivo judicial, se tiene designado por unanimidad a el licenciado Arnoldo Hernández Solano.

Para el cargo de Secretaría de la Junta Administradora, por unanimidad, se tiene por designada a la licenciada Lucrecia Ruiz Rojas.

Para el cargo de Tesorería de la Junta Administradora, por unanimidad, se tiene por designada a la licenciada Ingrid Moya Aguilar.

Para el cargo de la persona directora 1 de la Junta Administradora, por unanimidad, se tiene por designado al máster Miguel Ovares Chavarría.

Finalmente, para el cargo de la persona directora 2 de la Junta Administradora, por unanimidad, se tiene por designado al máster Mauricio Villalta fallas.

- 0 -

**Se acordó:** Conforme a la votación anterior, el directorio de la Junta Administradora del Fondo queda de la siguiente manera:

**Vicepresidente**: Licenciado Arnoldo Hernández Solano.

**Secretaria**: Ana Lucrecia Ruiz Rojas.

**Tesorera**: Licenciada Ingrid Moya Aguiar.

**Director 1**: Máster Miguel Ovares Chavarría.

**Director 2**: Máster Mauricio Villalta Fallas.

Hacer este acuerdo de conocimiento de la Superintendencia de Pensiones, de la Corte Plena, del Consejo Superior y de las Asociaciones Gremiales del Poder Judicial. **Se declara acuerdo firme**.

- 0 –

Interviene la Magistrada Rojas: “Es que temprano le plantee, y por la dinámica del Ministerio Público esto no se resolvió, pero me preocupa que ya Corté conoce una renuncia y que de alguna manera esa falta de esa persona pueda provocar en un determinado momento la continuidad de funciones del órgano, y que nosotros estamos debidamente enterados.

Entonces, yo solicitaba en la mañana, y ahora le vuelvo a reiterar, que hagamos las diligencias que sean necesarias, que las acordemos como acuerdo firme para sustituir a esta persona de acuerdo con los postulados legales, a fin de que si se llega a presentar la imposibilidad de alguno de los propietarios, el órgano no deje de funcionar, porque de eso depende el sustento de muchas personas. Entonces me preocupa muchísimo".

Refiere el Presidente, Magistrado Cruz: “Claro que me parece muy razonable y pertinente lo que usted dice, vamos a hacer todas las diligencias, porque el que renunció es nombrado por el colectivo judicial, pero habría que hacer las gestiones para que sea sustituido, por supuesto claro que sí, y declararlo acuerdo firme”.

**Se acordó:** **1.)** Tener por conocido el acuerdo adoptado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en sesión Nº 1-20, artículo I, respecto a la designación del máster Carlos Montero Zúñiga como Presidente de citada Junta, por el periodo del 27 de enero de 2020 hasta el 26 de enero de 2021. **2.)** Tener por conocido el acuerdo adoptado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones, en sesión Nº 1-20, artículo II, sobre la conformación del Directorio de la mencionada Junta, y desearle a sus integrantes éxitos en sus funciones. **3.)** Hacer de conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la comunicación remitida por el máster Mauricio Quirós Álvarez en que informa de su renuncia como integrante suplente en representación del colectivo judicial a dicho órgano, a fin de que se proceda con el trámite que corresponda para su sustitución. **Se declara acuerdo firme.**”

-0-

Asimismo, mediante correo electrónico de 27 de enero de 2017, el licenciado Eduardo Chacón Monge, hace de conocimiento de este Consejo Superior los supracitados acuerdos (artículos I y II) de la sesión N° 1-20 de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

Interviene la Vicepresidenta, magistrada Solano:  “La comunicación que nos fue remitida, en donde se nos comunica sobre la juramentación por parte de Corte Plena el día de ayer de los miembros de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, así como también el acuerdo tomado por Corte Plena en donde revocó parcialmente un acuerdo del mes de octubre del 28 de octubre del año anterior, en donde señalaba que la junta entrará en funciones el 3 de febrero, y en su lugar acuerdo que la junta iniciaba funciones a partir del día de ayer 27 de enero del presente año acuerdo, que fue declarado firme por la Corte Plena y que permitió que la junta iniciará sesiones el día de ayer de manera que todos los temas que están referidos a pensiones y jubilaciones cómo será señalando serán remitidos a la referida junta de manera que con relación a esto que dejamos asentado como el artículo 2° el acuerdo sería darnos por enterados del comunicado que nos hizo Corte Plena, y dejamos asentado en el registro el correo que nos fue remitido así como también la comunicación que nos hace el integrante Montero, quién fue designado como presidente de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial;  en nombre del Consejo Superior y el mío propio le externamos las felicitaciones y le deseamos éxitos en esta gestión, habida cuenta que según la legislación que rige el funcionamiento de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se trata de puestos en donde no hay ningún tipo de reconocimiento económico por parte de las personas que fungen en la junta y básicamente se trata nada más de la adquisición de una serie de responsabilidades, sumamente grandes para administrar el fondo más antiguo de jubilaciones que tienen Costa Rica, de manera que le deseamos éxitos en esta nueva función tan importante que han iniciado a partir del día de ayer.

Manifiesta el integrante Montero; “Les agradezco mucho, ayer tuvimos la primera sesión, los compañeros de la junta y mi persona somos conscientes de la responsabilidad que estamos asumiendo; de mi parte y la de los compañeros de la junta le estamos muy agradecidos con las palabras de apoyo que nos aporta y con el apoyo que el Consejo nos dio la semana pasada aprobando el convenio. Entiendo que para el Consejo también es una enorme responsabilidad y aquí creo que todos estamos con el mayor interés superior de que el fondo sea permanente y garantice la jubilación y pensión de las personas actuales y futuras que vayamos a depender del fondo; quiero aclarar además que las Direcciones del Poder Judicial, siempre tuvieron la mejor intención de velar por los intereses de la institución y todos teníamos la gran preocupación de cómo el fondo se puede trasladar y garantizar la operatividad de las labores de la junta, para no afectar a terceros. De parte de la junta les agradecemos muchísimo el apoyo a este Consejo Superior con el convenio, el cual quedó bien documentado, y casualmente ayer lo firmamos con el Presidente, Magistrado Cruz; ¡ya está suscrito oficialmente! y lo digo con toda confianza porque soy parte de este Consejo, pero sin el apoyo de cada uno de ustedes no hubiera sido posible; y esperamos hacerlo de la mejor forma. Tenemos un gran compromiso, un tema muy importante es que la mayoría de los de las personas designadas titulares y suplentes tenemos un interés personal en que el fondo se mantenga, para que este crezca y siga funcionando igual o mejor de lo que ya lo ha hecho en los últimos años. Creo que hay gente que conoce del tema, tal vez mi persona por estar aquí, tengo un poco más de experiencia que ellos, pero hay gente con capacidad en la junta, para mí también es un gran respaldo y una gran confianza, estoy seguro de la moralidad de todos ellos, así como del interés para que las cosas se hagan de la mejor forma posible. Agradezco muchísimo la confianza, porque eso nos compromete más que los mil millones que hemos de administrar, esas palabras de apoyo y reconocimiento que ustedes le dan a la junta nos comprometen a ser una buena labor.  Ayer le pedimos a Dios que nos bendiga en todas las labores que hagamos, que nos dé sabiduría para hacerlo con amor y de la mejor forma posible, porque las buenas intenciones existen, creo que hay capacidad en los que integran la junta y les reitero el agradecimiento a ustedes como compañeros y como Consejo Superior, del apoyo que le están dando la junta y que quedó plasmado en el convenio.

**Se acordó**: **1)** Tomar nota de la comunicación de la Corte Plena relativa al artículo X, de la sesión N° 4-2020, asimismo de los acuerdos adoptados por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en sesión Nº 1-2020, artículos I y II, respecto a la designación del máster Carlos Montero Zúñiga como Presidente de dicha Junta, por el periodo del 27 de enero de 2020 hasta el 26 de enero de 2021, así como  la conformación del Directorio de la citada Junta; por lo que este Consejo les desea a sus integrantes éxitos en sus funciones. **2)** Externar al máster Montero Zúñiga, la complacencia de esteConsejo Superior por su designación como Presidente de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y desearle muchos éxitos en su cargo. **3)** Hacer de conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).”

- 0 -

**Se acordó:** Tomar nota del acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 07-2020 celebrada el 28 de enero del 2020, artículo II.

**ARTÍCULO XXVIII**

**Documento N° 143-2020**

La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1884-2020 del 25 de febrero de 2020, remitió el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 06-2020 celebrada el 23 de enero del 2020, artículo LXIII, que literalmente dice:

“En sesión N° 110-19 celebrada el 19 de diciembre del 2019, artículo XXVIII, por mayoría, se solicitó criterio a la Dirección Jurídica para que, de forma prioritaria, informara a este Consejo sobre la gestión presentada por los servidores y servidoras judiciales indicados en esa oportunidad, en la que solicitaron que no se aplicara al salario escolar, la deducción por concepto de aporte al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, o por concepto de Comisión para la Junta Administradora.

Luego, en sesión número 03-2020, del 14 de enero de 2020, artículo XI, se tomó nota del oficio DJ-C-3-2020 del 8 de enero de 2020, suscrito por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico y el licenciado Roberth Fallas Gamboa, Profesional en Derecho 3B y de conformidad con el criterio legal expuesto en ese momento, se dispuso que se aplicaría la deducción necesaria por concepto de aporte al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a fin del buen funcionamiento de la Junta Administradora de dicho Fondo**.**

Las personas firmantes, Alexander José Masis Chacón, Ronny Bolívar Anchía Castro, Sebastián Vega Álvarez, María Auxiliadora Cruz Cruz, Magally Rubí Durán y Alejandro Rivera Chavarría, solicitaron lo siguiente:

“…**QUE NO SE APLIQUE AL SALARIO ESCOLAR QUE SE PAGARÁ EN ENERO DE 2020, NI A NINGÚN OTRO SALARIO ESCOLAR EN LO SUCESIVO, DEDUCCIÓN ALGUNA POR CONCEPTO DE APORTE AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, NI TAMPOCO SE APLIQUE DEDUCCIÓN ALGUNA POR CONCEPTO DE COMISIÓN PARA LA JUNTA ADMINISTRADORA** de dicho Fondo.

Sustento mi petición en el siguiente **HECHO**:

**Único**: Mediante ley número 9544, del 24 de abril de 2018, se reformó el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma tal que dicho numeral, en su inciso 1) se lee ahora así: “*Artículo 236- El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial tendrá los siguientes ingresos: 1) Un aporte obrero de un trece por ciento (13%) de los* ***sueldos que devenguen*** *los servidores judiciales, así como de las jubilaciones y pensiones a cargo del Fondo, porcentaje que se retendrá del pago periódico correspondiente*.” (La negrilla y el subrayado son suplidos)

Baso mi solicitud en el siguiente **FUNDAMENTO JURÍDICO**:

**Primero**. El “salario escolar” **no es un sueldo adicional o extraordinario** que se nos pague a los servidores y las servidoras judiciales en el mes de enero de cada año.

**Segundo**. El “salario escolar” se constituye mediante la **retención de un porcentaje del sueldo** que devengamos mensualmente los servidores y las servidoras judiciales, el cual se acumula y se nos paga el mes de enero de cada año.

**Tercero**: Los servidores y las servidoras judiciales tenemos derecho a recibir, **de manera diferida**, la suma que se nos **retuvo** del **sueldo ya devengado**, pues es un derecho adquirido que forma parte de nuestro patrimonio.

**Cuarto**: Los servidores y las servidoras judiciales **devengamos nuestro sueldo mensualmente** y de éste se retiene el porcentaje que **se acumula** y que **percibimos, como pago diferido y bajo el nombre de “salario escolar”**, el mes de enero siguiente.

**Quinto**: En virtud de que el “salario escolar” no constituye un sueldo extraordinario o adicional que se devengue en enero, sino que éste es el pago que de forma diferida se hace de un porcentaje de aquellos sueldos que ya fueron devengados en el mes respectivo, entonces **no es posible calificar el “salario escolar” como “un sueldo que devenguen”** los servidores y las servidoras judiciales.

**Sexto**: Precisamente porque el “salario escolar” **no es** un “sueldo que devenguen” los servidores y las servidoras judiciales, **entonces no está comprendido** dentro de los ingresos de los cuales se nutre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

**Séptimo**: Como el “salario escolar” **no es uno de los ingresos sobre los que pesa la carga pública** de aportar dinero para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, **entonces no es posible aplicar** al referido “salario escolar” que percibimos los servidores y las servidoras judiciales, **deducción alguna como aporte para dicho Fondo, ni tampoco por concepto de comisión para la Junta Administradora del mismo**.

**Octavo**: La naturaleza jurídica del “salario escolar” ya fue definida sobradamente por la Sala Constitucional y la Sala Primera, ambas de la Corte Suprema de Justicia, así como por el Tribunal Contencioso Administrativo. Al respecto, pueden consultarse la sentencia número 722-1998, de la Sala Constitucional y el desarrollo que de ésta se hace en la sentencia número 1100-F-S1-2010, de la Sala Primera, de las 14:30 horas del 14 de septiembre de 2010. También puede consultarse la sentencia número 2036-2009, de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo, de las 8:00 horas del 22 de septiembre de 2009. Es importante destacar que de las resoluciones citadas se evidencia la diferencia que hay entre “devengar un sueldo” (lo cual se da mes a mes, en el caso de los servidores y las servidoras judiciales) y “percibir el salario escolar” (que ocurre en el mes de enero de cada año, en el que se paga de forma diferida lo que para ese momento haya acumulado cada servidor o servidora judicial a raíz del porcentaje que se le retiene del sueldo que devenga mensualmente).

**Noveno**: Finalmente, en conclusión, la reforma que mediante la Ley número 9544 se efectuó del artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial excluyó definitivamente el “salario escolar” que perciben servidores y servidoras judiciales de los ingresos que nutren el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, lo cual, aunado a los argumentos anteriormente expuestos, queda en evidencia si se compara la redacción actual (transcrita en el Hecho que motiva la presente solicitud), con la que tenía de previo a la reforma. Antes de ser modificado mediante la Ley 9544, el inciso 1) del artículo 236 se leía así: “*Artículo 236.- Para atender el pago de las jubilaciones y pensiones, créase un Fondo que será formado con los siguientes ingresos: 1.- El nueve por ciento (9%) de todos los sueldos de los servidores activos, así como de las jubilaciones y pensiones a cargo del Fondo. Este porcentaje se retendrá mensualmente. Por razones de necesidad del Fondo y con base en estudios actuariales, la Corte podrá aumentar este porcentaje hasta un quince por ciento (15%)*”. Independientemente de que el “salario escolar” no es un sueldo adicional o extraordinario, se puede apreciar con claridad que la versión anterior de la norma en cuestión no hacía referencia a los “sueldos que devenguen” los servidores y las servidoras judiciales. Entonces, la reforma legal del año 2018, al hacer específica alusión al momento en que se devenga el sueldo, vino a descartar por completo que sobre el “salario escolar” (que ni es sueldo ni se devenga en enero) pese la carga pública de aportar al referido Fondo, ni tampoco la de financiar la Junta que lo administra.

Para acreditar mis alegatos, ofrezco la siguiente **PRUEBA**:

a. Solicito se examinen las siguientes sentencias: número 722-1998, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; número 1100-F-S1-2010, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; y número 2036-2009, de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo.

b. Solicito se compare la redacción actualmente vigente del numeral 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que tuvo ese mismo artículo hasta la publicación de la Ley número 9544.

Con base en todo lo anterior, concreto mi **PRETENSIÓN**:

Solicito se declare que sobre el “salario escolar” que percibimos los servidores y las servidoras judiciales no pesa la carga pública de aportar recursos para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, ni tampoco la de aportar una comisión para la Junta Administradora del mismo. Asimismo, solicito se giren instrucciones al Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial para que no se aplique al “salario escolar” que se pagará en enero de 2020, ni a los sucesivos pagos del “salario escolar”, deducción alguna por concepto de aporte para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, ni por concepto de comisión para la Junta Administradora de éste.”

- 0 -

El integrante Montero Zúñiga, manifestó: “En el acuerdo dice que por concepto de aporte al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a fin del buen funcionamiento de la Junta, me parece que hay que agregarle, porque el aporte al Fondo es el 13% y lo que garantiza el buen funcionamiento de la Junta es el 5 por mil, entonces, tal vez agregarle en el acuerdo, que las deducciones necesarias, tanto por concepto por aporte del Fondo como de los gastos administrativos de la Junta que están definidos por ley, porque en realidad son dos montos apartes y de contabilidades diferente, porque la parte que dice para el buen funcionamiento de la Junta eso lo garantiza el cinco por mil no los aportes al Fondo.”

De conformidad con lo dispuesto por este Consejo Superior, en sesión número 03-2020, celebrada el 14 de enero de 2020, artículo XI, mediante el cual se aprobó el Criterio Jurídico vertido en oficio número DJ-C-3-2020 del 8 de enero de 2020, suscrito por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico y el licenciado Roberth Fallas Gamboa, Profesional en Derecho, **se acordó:** Informar a las personas servidoras judiciales gestionantes que se aplicarán las deducciones necesarias por concepto de aporte al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, así como el aporte por gastos administrativos de la Junta Administradora del Fondo, a fin del buen funcionamiento de la referida Junta.**”**

- 0 -

**Se acordó:** Tomar nota del acuerdo adoptado por el Consejo Superior en sesión N° 06-2020 celebrada el 23 de enero del 2020, artículo LXIII.

**ARTÍCULO XXIX**

**Documento N° 154-2020**

La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, remitió el oficio N° 859-DE-2020 del 27 de febrero de 2020, en donde adjunto el oficio N° 106-FC-2020 de fecha 24 de febrero de 2020, suscrito por la MBA Floribel Campos Solano, jefa del Departamento Financiero Contable, referente a la participación de dicha Junta en la Comisión para el estudio del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que literalmente dice:

“Como es de su estimable conocimiento la Licda. Emma López Ramírez, jefa interina del Proceso de Tesorería de este Macroproceso y el Lic. Carlos Lizano Alfaro, jefe interino del Subproceso Administración de Personal de la Dirección de Gestión Humana, en el mes de abril del 2019 fueron designados para representar la comisión para el estudio del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, en atención a lo requerido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante nota No. MTSS-DMT-OF-471-2019.

Dicha comisión se encuentra integrada por personeros de diferentes Instituciones relacionadas con el otorgamiento de Pensiones y Jubilaciones, entre ellas: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Corte Suprema de Justicia, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros, Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

Al respecto es de indicar que, a la fecha se han efectuado dos reuniones en las que se ha analizado los objetivos, responsabilidades de las Instituciones, generalidades del citado convenio, entre otros, (se adjunta informe remitido a esa Dirección Ejecutiva mediante correo de fecha 27 de julio del 2019) y la siguiente reunión se efectuará el próximo miércoles 04 de marzo del 2020, las 9:00 am, en la en la sala de reunión de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, edificio Aurora, San Francisco, Goicoechea.

En virtud de lo anterior y en consideración que a partir del 27 de enero del presente año se conformó la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones se solicita a esa Dirección hacer atento conocimiento del presente asunto a la referida Junta, para lo que ha bien defina respecto a la participación en las futuras reuniones y responsabilidades que puedan surgir al amparo del convenio.

(…)”



- 0 -

Debido a que el 27 de enero del 2020, esta Junta Administradora fue juramentada oficialmente, **se acuerda:** Informarle a la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva y a la máster Floribel Campos Solano, jefa del Departamento Financiero Contable, que este órgano ha designado al presidente y al director 1 de la Junta Administradora, con el fin de que asistan a la Comisión para el estudio del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, en ese sentido, el próximo miércoles 04 de marzo del 2020, las 9:00 am, estarán asistiendo en la actividad de cita.

**ARTÍCULO XXX**

**Documento N° 155-2020**

La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante oficio N° 884-DE-2020 del 27 de febrero de 2020, remitió lo siguiente:

Para conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, me permito remitir oficio N° 95-SC-2020 de fecha 26 de febrero en curso, suscrito por la MBA Floribel Campos Solano, jefa del Departamento Financiero Contable, en donde remite Informe de los Auditores Externos de los Estados Financieros del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial al 31 de diciembre de 2019.

Cabe aclarar que, conforme la normativa vigente, oportunamente se remitió a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).



- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tomar nota del oficio N° 884-DE-2020 del 27 de febrero de 2020, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, referente al “Informe de los Auditores Externos de los Estados Financieros del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial al 31 de diciembre de 2019”. **2.)** Trasladar el presente acuerdo de conocimiento del Comité de Auditoría para su respectivo estudio.

**-o0o-**

**A las 12:10 horas terminó la sesión.**

1. Sesión del Consejo Superior 63-2015, artículo XXXII, donde se aprueba el informe 53-DO-2015 de la Dirección de Planificación. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sesión N° 36-08 celebrada el 15 de mayo del 2008, artículo XXXV. [↑](#footnote-ref-2)